

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 20º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-17435-2020
CARATULADO : ARIAS/FISCO DE CHILE

Santiago, veinticuatro de Enero de dos mil veintitrés

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE

Al folio 1, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, domiciliado en Doctor Sótero del Río 326, oficina 1104, comuna de Santiago, en representación, de doña Catalina Del Carmen Arias Quezada, jubilada, domiciliada en Anunciación N° 103, comuna de Maipú, Región Metropolitana; doña Ángela Adelina Arias Quezada, matrona, domiciliada en Camino Las Pircas N° 4221, casa F, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana; doña Mercedes Del Carmen Arias Quezada, pensionada, domiciliada en Estadio Sánchez Rumoroso N°135, Villa Los Adobes, comuna de Quilicura, Región Metropolitana; doña Patricia De Los Ángeles Arias Quezada, técnico en enfermería, domiciliada en Barros Arana N° 653, departamento 1503, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana; doña Elba Del Carmen Arias Quezada, auxiliar de párvulo, domiciliada en Eduardo Osorio Pardo N° 870, Villa Maestranza, comuna de San Bernardo, Región Metropolitana; don José Eduardo Arias Quezada, administrador público, domiciliado en Santa María N° 1601, comuna y ciudad de Osorno, Región de Los Lagos; don Ángel Raúl Arias Quezada, periodista, domiciliado en Libertad N° 1290, departamento L502, comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana; y, don Leonardo Antonio Arias Quezada, psicólogo, domiciliado en avenida del Taller N° 791, Edificio 16, departamento 201, Colonia Jardín Balbuena, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, República Mexicana; quien interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios, en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas 1687, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

A folio 10, consta la notificación al demandado.

A folio 11, se contestó la demanda.



Foja: 1

A folio 15, se evacuó la réplica de la parte demandante.

A folio 17, se evacuó la réplica de la parte demandada.

A folio 22, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que rolan en autos, notificándose a las partes con fecha 09 de mayo de 2022.

Al folio 26, se presentó recurso de reposición contra la resolución que recibe la causa a prueba, acogéndose con fecha 02 de junio de 2022.

Al folio 51, se rindió prueba testimonial.

A folio 59, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO.

EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO: Que, en audiencia de fecha 25 de julio de 2022, el demandado opuso tacha contra el testigo don Luis Antonio Núñez Calvin, alegando que concurre a su respecto la causal contenida en el N°7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la íntima amistad entre las partes, circunstancias que asegura se infieren claramente de su afirmación en términos de solidaridad con la familia de la víctima y su reconocimiento expreso en cuanto a que efectivamente tiene íntima amistad con la parte que lo presenta, lo que se justifica plenamente con las explicaciones previas que se le dieron al testigo. Agrega, que lo declarado expresamente por él, configura la circunstancia de gravedad que exige la causal invocada y en mérito de ello, solicita que se le niegue todo valor probatorio en definitiva.

SEGUNDO: Que, la parte demandante se opone a la tacha opuesta por la demandada, y expone que, al ser explicada la pregunta de lo que significa una amistad íntima, por parte del abogado de la demandada al testigo; este le indicó que de acuerdo a lo que establece la ley, existiría una definición legal de lo que es una amistad íntima, expresando un concepto que es del propio abogado, diciendo que se trataría de un apersona con la cual se comparte, con la cual se va a su casa; lo que asegura pudo generar confusión en el testigo.

Afirma, que no se dan los presupuestos del artículo 358 N°7 del Código de Procedimiento Civil, porque no existen hechos graves que permitan llegar a la



Foja: 1

conclusión de que existe una íntima amistad. Precisa, que la solidaridad y el hecho de ser vecinos, en ningún caso constituye una imposibilidad de poder declarar o de resultar inhábil el testigo, por lo tanto, se opone a la tacha.

TERCERO: Que, el artículo 358 N°7 dispone que: *“Son también inhábiles para declarar:*

7°. Los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaren.

La amistad o enemistad deberán ser manifestadas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias”.

Que, en esta línea, la causal del N°7 del artículo 358 del código procesal mencionado, se funda en la desconfianza que el legislador anticipa sobre el testimonio de quien se encuentra sujeto a un vínculo íntimo de amistad con la parte que lo presenta, entendiendo que dicha amistad le privará de la libertad para dar un testimonio fidedigno sobre los sucesos que dice haber percibido.

En este sentido, la misma norma invocada por la demandada requiere explícitamente que la amistad o enemistad se manifieste por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias, cuestión que no ocurre en la especie, ya que si bien la testigo expresó ser amigo del demandante, no señaló circunstancia alguna que permita calificar de íntima tal amistad; lo que conduce a rechazar la tacha en estudio, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

Cabe destacar, que el mero hecho de que dos personas se conozcan desde 1962, no inhabilita al testigo para declarar como testigo.

EN CUANTO AL FONDO:

CUARTO: Que, la parte demandante expone los siguientes relatos:

Relato de Catalina del Carmen Arias Quezada

“Mi nombre es Catalina del Carmen Arias Quezada, y soy la hija mayor de la familia Arias Quezada. Cuando tenía 25 años, el 26 de noviembre de 1973, asesinaron a mi hermano menor, Juan Domingo Arias Quezada, cuando él tenía tan sólo 17 años. Yo para ese tiempo no vivía con mi familia pues recién me había casado, pero mantenía una muy estrecha relación con ellos. Éramos una familia muy unida.



Foja: 1

Luego de ocurrido el golpe de Estado, mi familia se vio en una situación muy terrible. A los pocos días de ese día 11 de septiembre, me enteré de la detención de mi hermano Ángel, del asilo de mi hermano Leonardo y la desaparición de mi hermano Juan. Toda esta situación fue horrible, y me produjo un gran trastorno en mi vida personal y laboral, pues yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de Chile, desempeñándome como secretaria. Hago presente que esta fuente laboral me la buscó mi padre y él fue a constatar cómo era el ambiente donde me desempeñaría por 30 años.

El 27 de noviembre de 1973, por una llamada telefónica de mi hermana Ángela me entero que ese día se presentaron unos detectives en el domicilio de mis padres a comunicar que encontraron el cadáver de mi hermano Juan en la Parcela 38 de El Arrayán junto a otras personas. La verdad cuando recibí esta noticia no podía creer el relato de mi hermana, fue un bloqueo emocional. Pasaron por mi mente todos los años vividos con mi querido hermano menor. Al ser la mayor me consideraba como una segunda madre para todos ellos, porque desde pequeña tuve que ayudar a mi madre en la crianza de mis nueve hermanos, teniendo que ausentarme incluso de mis estudios cuando mi madre tenía que acudir a la maternidad.

Los días que vinieron fueron aterradores. Al día siguiente mi angustia era cómo solicitar permiso en mi trabajo para concurrir al Instituto Médico Legal a ayudar a mi padre y hermana Ángela a realizar los trámites pertinentes para poder recuperar el cuerpo de mi hermano. Recuerdo que alrededor de las 14.00 horas llegué al Instituto Médico Legal y me llevaron al lugar donde estaba Juan. Al retirar la bandeja donde se encontraba su cuerpo, el mayor impacto fue verlo completamente destrozado, sus piernas desgarradas pudiendo observar sus huesos, su nariz rota y los impactos de bala en su cabeza. Además de las múltiples lesiones de quemaduras en todo su cuerpo, especialmente en el tórax. Fue desgarrador percatarme del estado en que lo dejaron.

Se realizaron los trámites fúnebres correspondientes, pero al tratar de vestirlo fue muy impactante no poder hacerlo pues su ropa no le entraba debido a la gran hinchazón que presentaba, situación que hasta el día de hoy no he podido borrar de mi mente. Recuerdo que tratamos de taparlo con su ropa, pero no todo pudimos hacerlo, y lo que no se pudo lo acomodamos dentro de la urna, la que había sido colocada en el suelo debiendo con mi hermana arrodillarnos para poder efectuar lo antes descrito. Mi padre observaba con su rostro petrificado y pálido. A continuación, lo dejamos en una capilla en el Cementerio General y al



Foja: 1

día siguiente lo trasladamos al Cementerio Metropolitano, lugar donde descansan sus restos hasta el día de hoy.

Recuerdo a mi hermano Juan como un adolescente de carácter muy tranquilo, con muchos proyectos de vida los cuales no pudo realizar. Era introvertido, de piel morena, pelo crespo y su amplia y generosa sonrisa, siempre de buen humor y una mirada muy amplia a los problemas que se le podían presentar.

El estado psíquico y nervioso en que me vi sumida, pensando todos los días, además, en qué estado se encontrarían mis otros hermanos, Ángel y Leonardo, también repercutió enormemente en el desarrollo de mi vida personal. Tanto es así, que en 1973 yo estaba embarazada y lo perdí cuando tenía cuatro meses de embarazo. Simplemente mi cuerpo no pudo soportar tanta carga emocional y física.

El siguiente año intenté embarazarme después de una terapia psicológica en conjunto con un tratamiento ginecológico. Logré embarazarme, pero desafortunadamente no logro llegar a término, lo perdí al tercer mes de embarazo.

Mi angustia siguió siendo tratada con terapia psicológica y tuve que someterme a tratamiento de fertilidad, logrando en el año 1975 embarazarme, teniendo que guardar reposo absoluto durante todo el embarazo, terminando en un parto prematuro.

En paralelo con esto vivía en constante preocupación en la parte laboral, porque yo seguí trabajando en el ejército, y se hacían constantes chequeos en referencia a la familia (me refiero a la D.H.P.: Declaración Historial del Personal).

Mi familia entera se vio enormemente afectada. Cada cual vivió su duelo como pudo, ya que mi padre se opuso a que nosotros pudiéramos mantener una conversación abierta sobre lo sucedido con mis hermanos, siendo este tema absolutamente prohibido de mencionar. Mi madre se encerró en sí misma, mi padre se convirtió en alcohólico, transformándose en una persona violenta y agresiva, generando mayor desunión familiar, lo que nos llevó a un mayor distanciamiento entre todos. Nadie sabía cómo lidiar con lo que había sucedido, con la pérdida tan injusta.

Recién cuando fuimos todos adultos, y más mayores, pudimos lograr conversar algo sobre la muerte de Juan y dar a conocer nuestros sentimientos con respecto a lo sucedido, no pudiendo aún sincerarnos totalmente. Es un luto latente y no resuelto, un dolor que se ha mantenido en silencio durante largos años.



Foja: 1

Hoy trato de mantener el bonito recuerdo de mi hermano Juan, a pesar de no poder olvidar los momentos vividos, recordándolo siempre. Y sobre todo me hizo falta al nacer mis hijas, porque me hubiera gustado que ellas lo hubieran conocido y apreciaran la bondad, alegría y la tranquilidad y sabiduría con que veía el mundo, aún a su tan corta edad. Para él no existía maldad”.

Relato de Ángela Adelina Arias Quezada

“Mi nombre es Ángela Adelina Arias Quezada, para el año 1973 tenía 20 años y vivía con mi familia en la comuna de San Joaquín. Mi familia estaba compuesta por mis padres y 10 hermanos. Éramos 6 mujeres y 4 hombres.

El 16 de septiembre de ese año, pocos días después del golpe de Estado, mi hermano mayor Ángel Raúl Arias Quezada, de 22 años, fue detenido en su domicilio en la comuna de Santiago por detectives de Investigaciones de Chile, siendo torturado y permaneciendo detenido 13 meses en diferentes lugares: Estadio Nacional, Estadio Chile, Oficinas Salitreras de Chacabuco al interior de Antofagasta, Cárcel Pública de Santiago y Tres Álamos.

Por otra parte, debido a la brutal represión y persecución por su militancia, mi hermano Leonardo Antonio se había asilado en la Residencia del Embajador de México, país que lo acogió y donde vive hasta el día de hoy.

El 27 de noviembre de 1973 mi hermano Juan Domingo Arias, de tan solo 17 años de edad, quien era estudiante de IV Medio en el Liceo Amunátegui de Santiago, fue detenido, salvajemente torturado y ejecutado.

De la noche a la mañana mi familia se redujo a mis padres y 7 hermanos, era una situación difícil de describir, desoladora y extremadamente triste. Recuerdo que el 28 de noviembre se presentaron dos detectives en nuestro domicilio preguntando por mi padre para darle la triste y dolorosa noticia de la muerte de mi hermano Juan. Dijeron que su cuerpo sin vida había sido encontrado por un vecino en la Parcela 38 de El Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea. Nos dejaron una citación para el día siguiente para concurrir al Instituto Médico Legal a reconocer su cuerpo, pues estaba como NN masculino.

Acudí con mi padre para realizar la experiencia más aterradora y dolorosa que he realizada en mi vida. Reconocer a mi hermano muerto. Cuando llegamos un empleado del Instituto me llevó al lugar donde estaban los restos de él, quedando mi padre esperando en otra sala. Yo estaba muy nerviosa, tenía miedo, estaba completamente aterrada. Recuerdo que retiró la bandeja y me encontré con el



Foja: 1

cuerpo de mi hermano. El impacto que recibí al ver cómo lo habían dejado fue tan aterrador que creí desmayarme ahí mismo, pero saqué fuerzas porque debía terminar con la misión que me habían encomendado. Comencé a revisarlo, hacía poco que le habían realizado la autopsia, estaba mojado. Primero observé su cabeza y efectivamente se veían los orificios de entrada y salida de las balas, su cuerpo mostraba que había sido torturado con alevosía y ensañamiento; tenía facturada su nariz, en la frente tenía una marca profunda como si le hubiesen colocado un alambre y le fueron apretando su cabeza. Tenía múltiples quemaduras en su cuerpo que al parecer eran de cigarros, eran circulares, del tamaño de una moneda de 1 peso. Le faltaban trozos de piel y tejido muscular en sus piernas, además le faltaban sus dos pulgares de sus extremidades inferiores, faltaban algunas uñas en los dedos de las manos. No podía creer lo que le habían hecho, cómo lo habían dejado.

Terminado el reconocimiento por mi parte, entró mi padre a verlo. No pudo soportar ver a su hijo en esas condiciones y se descompensó, él era diabético e hipertenso. Personal del Instituto tuvo que ayudarme con él.

El dolor más grande fue decirle a mi madre que su hijo estaba muerto y nada se podía hacer para revivirlo. No había palabras para consolarla, cayó en mis brazos llorando y mis hermanos más pequeños mirándola sin entender lo que ocurría. Fueron frases y palabras que quedaron en mi mente, y que espero nunca tener que volver a repetir.

Recuerdo que esa misma tarde fuimos con mi hermana mayor y mi padre a realizar los trámites para su sepultura. Tratamos de vestirlo, pero fue imposible pues su ropa no le entraba por el edema que presentaba su cuerpo. Tenía todo su cuerpo hinchado. Quedó en una capilla del Cementerio General hasta el día siguiente que lo llevamos al Cementerio Metropolitano, lugar donde su cuerpo descansa.

A raíz de los hechos, pasé a ser la hija y hermana mayor que estaba a cargo de esta familia, pues mi hermana Catalina de 25 años se había casado y no vivía con nosotros, aunque iba todos los días a vernos.

Todo lo que tuve que vivir fue un episodio muy traumático de mi vida, tener que dar apoyo, levantar a mi familia para volver a comenzar y retomar la vida de cada uno de los miembros destrozados por la vivencia de un hermano torturado y ejecutado. Mi familia se desmoronó, todos sus integrantes destruidos por el dolor,



Foja: 1

tristes, sólo en silencio podíamos llorar la pérdida porque nadie podía hablar de lo que había pasado.

En esos años yo estaba estudiando Obstetricia en la Universidad de Chile. Tuve que recurrir al servicio de salud para iniciar un tratamiento psiquiátrico y psicológico por varios años. Continué estudiando con mucho esfuerzo, ya que la imagen de mi hermano se me hacía recurrente y la angustia no me dejaba concentrarme en mis estudios, pero me lo propuse y terminé mi carrera titulándome de Matrona en 1976.

Me fue muy difícil poder desempeñarme como matrona pues las secuelas psicológicas, estados depresivos, tristezas, llantos sin causa aparente, todas estas secuelas me hicieron ser insegura, temerosa, y es por esto que decidí trabajar después de varios años de egresada, en forma independiente hasta el día de hoy.

Las terapias me ayudaron a estabilizarme emocionalmente pues cuando sucedieron los hechos relatados yo no podía dormir, veía en todas partes a mi hermano, soñaba con él, tenía pánico de dormir y llegar a mi casa, lo que se acrecentaba por el comportamiento de mi padre, quien con el transcurso de los días, semanas y años se convirtió en alcohólico. Esta situación se hizo insostenible porque mi padre se volvió aprehensivo, no permitiendo hablar de los hechos ocurridos, no pudiendo vivir el duelo en familia, no pudiendo expresar o conversar lo acontecido, era un tema completamente tabú. Crecí con la angustia y tristeza en mi mente no pudiendo expresar y compartir en familia el dolor tan grande que sentía.

Recién cuando fuimos ya adultos pudimos juntarnos a hablar de nuestro hermano Juan e incluso en el año 2017 hicimos un libro en honor a él y la familia. Cada uno vivió su duelo como pudo, siempre recordándolo en nuestro corazón.

Cuando nacieron mis hijos me volví una madre excesivamente posesiva, obsesiva, protectora, aprehensiva porque siempre tenía el temor que les pasara alguna situación con daños irreparables. Mi inseguridad, los temores, las aprehensiones fueron transmitidos inconscientemente a mis hijos.

Con todos estos estados emocionales mi sistema inmunológico fue dañado, hace 8 años que padezco de esclerodermia, una enfermedad crónica que afecta al tejido conectivo del cuerpo que se encarga de sostener la piel y los órganos



Foja: 1

internos, presentando endurecimiento de la piel y los vasos, dolor e hinchazón de músculos y articulaciones. Estoy en tratamiento con reumatóloga.

Han pasado 46 años, pero los recuerdos de los hechos no se han borrado en mí, siempre afloran con tristeza pensando cómo habría sido mi hermano hoy en día con 64 años. Él era un joven lleno de ilusiones, proyectos de vida, cariñoso, jovial, con su hermosa sonrisa, excelente hermano, conversador, siempre me contaba sus problemas y me pedía consejos. Un joven que entendía a toda la gente, disculpaba los errores de los demás, quizás por eso muchos se aprovechaban de él. Era bueno, solidario y confiado, hasta yo diría ingenuo. Muchas veces cuando conversábamos se lo decía y lo criticaba.

Aún no logro entender y menos asimilar la trágica y dramática partida de este mundo a tan corta edad y la destrucción de mi familia y la desunión de todos mis hermanos. Aún tengo pensamientos recurrentes de mi hermano Juan, no hay día que no me recuerde de él, más realizando este relato he vuelto a vivir todos los hechos, siento una gran pena y tristeza”.

Relato de doña Mercedes del Carmen Arias Quezada

“Mi nombre es Mercedes Arias Quezada. En el año 1973 vivía con mis padres y mis 9 hermanos en la calle Valenzuela Llanos, Población San Joaquín. Yo tenía 15 años para ese entonces y era estudiante.

Recuerdo que tuve una infancia feliz, rodeada de todos mis hermanos, con muy poca diferencia de edad entre nosotros. Nos llevábamos todos muy bien y jugábamos e inventábamos juegos. Éramos todos muy unidos, sanos y felices.

Mi madre una dueña de casa maravillosa, cocinaba exquisiteces, nos hacía la ropa, bordaba, tejía nuestros chalecos, calcetines. Era múltiple y era fantástica. Mi madre tenía 38 años, era adorable, la mejor.

Mi padre un hombre estricto, jubilado de Carabineros, trabajador, proveedor de alimentos y a todos nos dio una buena educación. Él participaba muy activamente de nuestra educación porque la consideraba lo más importante. Asistía a todas las reuniones y eso me hacía sentir muy feliz.

Siempre tuve afinidad en los pensamientos políticos con mis hermanos, Ángel, Leonardo y Juan. Ellos participaban mucho y me llevaban a reuniones en una sede cerca de nuestra casa donde se conversaba de política, leíamos libros y debatíamos temas sociales y políticos. Todos ellos eran del Partido Socialista,



Foja: 1

pienso que eso era ser militante de un partido. Me sentía feliz porque mis hermanos me consideraban. Yo era joven, pero entendía perfectamente lo que sucedía en el país, los problemas sociales.

Para nosotros como familia el golpe de Estado del 11 de septiembre marcó un antes y un después. Mis hermanos tuvieron que esconderse. A Ángel lo tomaron detenido y Leonardo tuvo que asilarse en la casa del embajador de México. De Juan no supimos más hasta que llegaron las noticias de que lo habían asesinado.

Un día en el mes de noviembre, yo había ido con mi cuñada llamada Zuny a retirar la ropa de mi hermano Leonardo a un centro de asilados políticos exclusivo para extranjeros. Retiramos sus pertenencias y al volver a casa doblando la esquina veo un auto azul con una sirena encendida que sonaba muy fuerte.

Entramos rápido a la casa y lo único que escuchaba eran los gritos ensordecedores de mi madre, llorando, gritando. Luego un detective se identificó y me pidió una foto de Juan y se la llevó, me dijo “su hermano Juan fue encontrado muerto en El Arrayán junto a otros amigos, así que le dije a su padre que deben ir a la morgue a reconocer el cadáver”. Mi padre no decía nada, mi madre gritaba y fui al patio a verla, solo lloraba y repetía mil veces el nombre de Juan. Al día siguiente fue el reconocimiento del cuerpo y fue sepultado el mismo día con el ataúd cerrado. Lloraba y lloraba al ver a mi madre destrozada. Mi padre lo vi llorar debajo de la escalera para subir al segundo piso en la casa, estaba solo, jamás vi a mis padres juntos llorando la muerte de su hijo. Desde el día que mi hermano fue asesinado mi vida cambió.

Mi padre nos dijo a todos que nunca más se hablara en casa de la muerte de Juan, y así fue. Nadie nunca más pudo hablar de lo que había pasado, tuvimos que soportar ese enorme sufrimiento en completo y doloroso silencio.

Mi hermano Ángel estaba detenido en la cárcel, mi hermano Leonardo esperando que le dieran la salida a México. Lo visité en la casa del embajador de México para contarle la muerte de nuestro hermano. Lloramos los dos juntos por esta enorme injusticia, y nos despedimos.

Mi familia se desmoronó por completo, un quiebre producto del asesinato de Juan. Yo tenía sólo 15 años y veía sufrir a mi madre y llorábamos en silencio para que mi padre no nos retara. Fue una experiencia demasiado traumática para todos. Después de la muerte de Juan ya nunca más fuimos familia, la familia se desplomó, solo en silencio podíamos llorar la pérdida. El sufrimiento más grande



Foja: 1

que recuerdo era el de mi madre, que permaneció en cama llorando y sin comer por varios días.

Recuerdo que mi padre se transformó en un alcohólico y lo único que deseaba era morir. Fue peor porque mi padre jamás se servía un vaso de vino. Una vez colgó una soga en el riel de la cortina de la cocina y se quiso ahorcar, yo tenía 17 años. Le suplicaba llorando que no lo hiciera, pero estaba ebrio y resbaló cayendo y quedando inconsciente. Se reventó un oído y estuvo hospitalizado por mucho tiempo.

Nunca existió un momento de desahogo familiar. Con el pasar del tiempo me convertí en una mujer temerosa, introvertida, insegura, de mal carácter, sufría en silencio y no podía vivir el duelo y menos compartir el sufrimiento abrazando a mis hermanos.

Una serie de episodios de fracasos me sucedió, no me gustaba estudiar, después no me pude preparar bien para dar la prueba para ingresar a la universidad y me sentí fracasada, me sentía derrotada y con justa razón, no tenía familia y menos el apoyo de mis padres. Solo recuerdo que mi padre se preocupaba de alimentarnos y darnos educación, y todo lo demás no tenía importancia.

Hasta el día de hoy mi madre simplemente no habla de Juan, y cuando tratábamos de tocar el tema eran discusiones entre mis hermanas, nada fue igual. Mi relación con mi madre ha sido nefasta hasta el día de hoy. No logro entender qué me pasó con ella o a ella qué le pasó conmigo. Un día me dijo que me tenía que casar y así lo hice a los 30 años, obviamente con un triste final. Me separé después de 11 años de infeliz convivencia. Cuando fui madre a los 33 años, estaba llena de temores, miedos, demasiado aprehensiva, con depresión, y me refugié en el alcohol por mucho tiempo. Hasta el día de hoy soy una mujer muy inestable sentimentalmente.

Recurrí por ayuda profesional de un psicólogo, siquiatra y luego fue una hipnosis. Tengo problemas de insomnio y he tomado por años pastillas para dormir. Vivo en constantes depresiones y sufro de crisis de pánico.

Es triste pensar que la muerte violenta e injusta haya perjudicado tanto a una familia numerosa y que era unida, graciosa, con una madre joven y un padre responsable, un padre que jamás dejó de traer el sustento al hogar.

Yo, por una parte, viví a la deriva al no tener de pie y unidos a mis padres para que me guiaran, aconsejaran, orientaran, y sentirme querida y protegida por ellos.



Foja: 1

Es tan injusto arrebatarnos a un miembro de la familia y dejarnos divididos, heridos, tristes y, más aún, a mi madre que aún no ha podido relatarnos la corta vida de su hijo asesinado.

Cada episodio de mi vida, cada decisión era consultada al psicólogo. La inseguridad, las aprehensiones, los temores fueron transmitidos inconscientemente a mis hijos.

Hoy tengo 61 años y, aun así, ese episodio triste que me dejó mi hermano viene a mi mente a cada momento. He aprendido a vivir con la soledad y ausencia de Juan. Cada día que pasa solo deseo que esto nunca hubiera sucedido. El dolor estará hasta la muerte.

Mis hijos han crecido y me han conversado sobre que he sido una madre sobreprotectora, temerosa y muy depresiva. Temores transmitidos por el sufrimiento injusto del hecho de haberle arrebatado la vida un joven de nombre Juan Domingo, de apenas 17 años”.

Relato de doña Patricia de los Ángeles Arias Quezada

“Mi nombre es Patricia Arias Quezada y soy la octava de diez hermanos. Mi infancia significó crecer, jugar, reír, estudiar y ser feliz. Eso fue lo que viví hasta que nuestra familia se derrumbó y se separó. Todo por la muerte de Juan, mi hermano, el 27 de noviembre de 1973.

Antes de que lo asesinaran, me desarrollé en un ambiente familiar donde crecí y pude estudiar con el apoyo que siempre me entregó mi padre y madre. Para mí y mis hermanos era motivo de mucha felicidad, especialmente con Juan ya que era el hermano hombre más cercano a mí, y yo tenía un cariño y afecto especial hacia él.

Recuerdo vívidamente el día de los hechos. Yo tenía 12 años cuando llegaron unos detectives a la casa a avisar que mi hermano Juan había sido “encontrado” muerto. Desde ese momento al parecer bloqueé inconscientemente mucho del recuerdo relacionado con él.

Siempre me di cuenta el dolor que mis padres sentían, un dolor que día a día los iba destruyendo más. Recuerdo yo haber tenido sentimientos encontrados porque había bloqueado los recuerdos, pero en el fondo sentía que tenía recordar lo sucedido.



Foja: 1

Mi padre tomó la decisión de no volver a hablar ni comentar la muerte de Juan, ni el exilio de mi hermano Leonardo, ni tampoco lo ocurrido a Ángel, detenido por mucho tiempo y torturado. Esto me hizo sentir que era una buena justificación para simplemente olvidarme de este enorme dolor, olvidarme de todo. Luego de la muerte de Juan el 27 de noviembre viví en un hogar lleno de tristeza, silencio y temor. Mi padre ahogó su pena en el alcohol, mientras mi madre lo único que hacía era llorar en silencio.

Cuando cumplí 15 años, en mi soledad pensaba que en nada serviría formar una familia porque todo lo sucedido se volvería a repetir. Tomé la decisión de tener algún hijo, pero nunca unirme en matrimonio con algún hombre, ya que pensaba que todo sería destruido. Tuve pocas amistades porque no me importaba divertirme.

Aunque no quería recordar lo que le había pasado a mi hermano, siempre aparecía dentro de mí su recuerdo, lo que me hacía aislarme y me provocaba profunda tristeza. Me sentía culpable, pero en una forma muy egoísta le echaba la culpa a él del dolor que sentía.

Mi padre nos inculcaba mucho el estudio. Estudié una carrera técnica con mucho esfuerzo, porque me distraía fácilmente. Ahora puedo decir que todos esos pensamientos que me distraían estaban relacionados con mi hermano.

Luego de un tiempo me enteré cómo había muerto. Y el enterarme de lo que le habían hecho fue un gran golpe para mí, y finalmente volví a decaer.

No pude formar una familia. Conocí al padre de mi hija, pero llegué a creer que él solo quería hacerme mal. Tuve una hija que en la actualidad vive conmigo, ya que siempre he pensado que sola le podría pasar algo.

Mi vida la he construido sobre temores y miedos. Con mis hermanos hemos llegado a la conclusión que a todos nos ha ocurrido lo mismo, de una u otra forma nos ha afectado en el desarrollo de nuestras vidas.

Esto ha afectado todos los aspectos de mi vida. En la actualidad tengo 58 años y trabajo desde los 20. No ha sido fácil mi vida laboral, siempre he tenido problemas de relación con mis pares debido a mis estados de ánimo, que cambian con mucha facilidad.

Recuerdo a mi hermano Juan a diario. He recibido ayuda de profesionales, pero me ha costado mucho salir adelante. Me es imposible hablar de él sin llorar”.



Foja: 1

Relato de doña Elba del Carmen Arias Quezada

“Mi nombre es Elba del Carmen Arias Quezada. La verdad es que me cuesta mucho hablarlo, pero es lo que pasó y lo viví. Todo empezó con la desesperación de 10 hermanos y sus padres, cuando el gobierno de Salvador Allende fue derrocado el 11 de septiembre de 1973. Al pasar los días luego de aquel acontecimiento, 3 de mis hermanos, Ángel, Leonardo y Juan, comenzaron a desaparecer. Juan salió a comprar pan en la población San Joaquín y nunca más volvió. Recuerdo que el 27 de noviembre nosotras íbamos llegando del colegio con mis hermanas y nos encontramos con la sorpresa de que nos vinieron a avisar que Juan había fallecido, o sea, le habían quitado la vida y que lo habían encontrado con 4 personas más en Lo Barnechea.

No pudimos velarlo nosotros, lo dejaron en el Cementerio General y ahí fue velado en la noche. Al día siguiente lo fuimos a buscar y su ataúd estaba sellado, no lo pudimos ver por última vez y esa fue una tristeza muy grande para mi madre. Recuerdo que salió en el diario “Quíntuple asesinato en Lo Barnechea”. Recuerdo que lo encontraron con otras cuatro personas, con disparos en sus cuerpos. Juanito tenía las piernas con cortes, su labio destrozado, quemado su cuerpo por todos lados. Juan estudiaba en el liceo Amunátegui y cuando lo mataron, estaba todo el colegio en su funeral, había muchísima gente, pero cuando estábamos listos para hacerle un discurso, empezaron a sonar las cargas de las metralletas, fue algo de meterlo en la tumba y correr.

Para nosotros el funeral fue lo peor que nos pudo haber pasado, porque no pudimos tener el cuerpo de él al lado de nosotros, fue mi hermana Ángela con mi papá a reconocerlo y ahí comenzó el martirio. Al no poder velarlo, fue una desesperación para nosotros como familia. Mi madre se derrumbó, la podía ver tirada en la cama, sin hablar, sin querer saber de nadie. Todos nosotros éramos tan chicos, muy chicos, y nos quedábamos al lado de ella. Mi padre, haciéndose el fuerte, se guardó lo que sentía mucho más de lo que ya lo hacía y comenzó a beber alcohol. Mi papá solo duró 10 años más después de todo lo que sufrió, yo creo que murió de pena.

Para todos nosotros ha sido igual de duro, pero sobre todo para mi madre. Yo desde ese día no le he vuelto a ver esa sonrisa en su cara como cuando los tenía a todos juntos. A mi mamá, cuando conversamos, porque yo converso mucho con ella, me dice que su corazón no está entero, que ya de a poco se ha ido derrumbando por esto. Ella no puede entender como un niño de 17 años le quitaron la vida como lo hicieron con Juanito. Debido a esta pena, ella ha sido



Foja: 1

operada dos veces del corazón y está con marcapasos. No ha podido salir adelante, no puede entender el por qué, cómo ella pudo haber enterrado a un hijo cuando se supone que son los hijos los que deben enterrar a una madre. Le hace mucha falta Juanito, sin duda. Ahora, hace unos años, dejó de ir a ver su tumba, luego de ir todas las semanas. Ella decía que veía a Juan cuando iba al cementerio. Hasta que un día dejó de verlo y ese día se desmayó. Luego que pasó esto, la fui a dejar a su casa y ella me dijo que fue el primer día que no vio a Juan, desde ahí que no ha vuelto al cementerio.

Tengo 8 hermanos y todos lo hemos sufrido de distinta manera. Mi hermana mayor perdió dos veces a un bebé por el hecho de pasar esta pena, esta angustia de tener que reemplazar a mi madre, ya que ella no se ha levantado de este sufrimiento aún. Mercedes también, es muy poca expresiva, pero ella sufre. Ángela tampoco ha expresado lo que siente, pero ella lo fue a reconocer, ella vio como estaba, como lo dejaron. Marcela, la menor, no lo pudo conocer ya que solamente tenía 3 años. Paty, ella no expresa mucho lo que siente por el mismo hecho de ver sufrir a nuestros padres. Leonardo fue un exiliado político, Ángel también sufrió mucho, pero esas cosas son aparte, ellos además de sufrir la pérdida de su hermano tuvieron que soportar su propio calvario, el exilio y el presidio. El sufrimiento que hemos sentido es muy grande, no lo puedo expresar y nos separamos como hermanos, pero no por distanciarnos los unos de los otros, sino en su propio mundo, porque cada uno hizo su vida sin expresar sus sentimientos con claridad, todos evitamos conversar nuestros sentimientos que al mismo tiempo son el sufrimiento de toda una familia.

Cuando asesinan a mi hermano Juan yo tenía 13 años, él era una persona muy importante para mí y no puedo entender por qué, teniendo solamente 17 años, le hicieron ese daño, ese dolor y esa muerte. Perdí a un gran hombre, a un gran amigo a mis 13 años. Era mi gran confidente, al que, hasta el día de hoy me falta en mis días de soledad y problemas, lo echo mucho de menos. Han pasado 47 años de estos hechos dolorosos para mí, pareciera que ese tiempo todo lo debe haber sanado, sin embargo hoy estoy en atención para sanarme. Mucha gente nos dice ya pasó, pero somos nosotros los que lo sufrimos, es la familia Arias Quezada. Hoy asisto a sesiones con psicólogo y psiquiatra por mis desencuentros, mi manera de sentir, la forma como no puedo hacer mi vida normal, de aceptarla.

Juan siempre me cuidaba. Me sentí muy feliz, viví la alegría de saber que se preocupaba por mí. Me persigue esa necesidad de Juan por saber cómo estoy,



Foja: 1

cómo me siento, si algo me pasa. Esa preocupación se ha ido agrandando con el tiempo, es como si él fuera el único que me pudiera ayudar en esta ausencia. A veces pienso que soy yo la ausente y él está presente.

Me casé, tengo dos hijos. Mi hijo Felipe tiene un parecido muy especial con mi hermano Juan, no sé si será por sus rasgos o el carácter tan delicado que me brinda. Creo que es un todo donde yo misma estoy. Siento en su trato una especial acogida, me brinda ese espacio que a veces no logro encontrar.

Ninguno de nosotros ha querido decir lo que verdaderamente siente. No nos hemos dado la libertad de vivir en familia, cada uno en lo suyo. Somos familia y a veces no lo parecemos, todos arrastramos un dolor que se traduce en una forma de vivir, pero no lo vemos. Tengo 60 años, y esta experiencia dolorosa ha repercutido en el sentido de que no puedo entender cómo se puede estar tantos años sin poder hablar sobre el dolor que desgarrar. Al menos yo, y estoy segura de que a mis hermanos también, el corazón atrapado en los sentimientos no lo permite. Pienso que no es saludable ir todos los sábados al cementerio a ver a mi hermano muerto y llorarle en la tumba, sabiendo que solo está ahí inerte, y es difícil decir ya, ya se fue, ya pasó. No puedo, él siempre va a estar con nosotros”.

Relato de don José Eduardo Arias Quezada

“Mi nombre es José Arias Quezada. Nací en la ciudad de Santiago el 02 de septiembre del año 1962, tenía 11 años para cuando ocurrieron los hechos, y cursaba el quinto año de la enseñanza básica en la Escuela N°30 de la Población San Joaquín en la comuna de San Miguel. Mi familia la constituye mi padre Ángel Custodio Arias Godoy, mi madre Adelina Quezada Pacheco y diez hermanos. Mi padre era oficial de secretaría en Carabineros de Chile. Nuestros padres nos criaron y educaron con gran dedicación. Éramos una familia de escasos recursos económicos, el único ingreso familiar era el de mi padre. La crianza y condición familiar hizo que nuestro deber fuera responder con responsabilidad. Estábamos conscientes que con formación académica podríamos revertir de alguna manera nuestra precariedad económica.

Debido a la represión desatada con el golpe de Estado de 1973, como familia perdimos todo contacto con mis tres hermanos hombres dado que los tres participaban activamente en política, específicamente en el Partido Socialista. Yo escuchaba información de mis padres. Un día me enteraba que Juan había huido al sur, situación que con el tiempo y conversando con familiares de Talcahuano me confirman que efectivamente había sido así. A los pocos días del golpe de



Foja: 1

Estado escucho a mi madre que con mucho dolor nos dice a los que estábamos en casa que Ángel había sido detenido cuando salía de su domicilio. De Leonardo no sabíamos nada. Todo era muy confuso para mí, no entendía qué sucedía, por qué a mis hermanos los buscaban con tanto interés. Por esos días llegan varios militares y con mucha prepotencia ingresan a mi casa, buscando a los hermanos Arias. Mi padre conversaba con ellos y se calmaban. Comienza así a invadir y apresar mi existencia pre adolescente una constante condición de miedo.

Fueron días muy confusos para mí, le preguntaba a mi madre qué pasaba con mis hermanos y ella trataba de explicarme, yo veía en sus ojos mucha tristeza. Un día vino una vecina a decirle que tenía una llamada telefónica, mi mama salió corriendo y pudo conversar con Juan, quien solo le decía que no se preocupara, que él estaba bien, que estuviera tranquila. En otra oportunidad mi madre sale nuevamente a atender una llamada telefónica donde la misma vecina, cuando volvió, escuche que le decía a mi padre que Leonardo estaba en la Embajada de México. Ella luego me explicó que así era mejor, que con tanta persecución mi hermano estaría mucho mejor en otro país. Dado que tuvo que venir el Canciller mexicano para llevarse a los asilados, comenzaron así siete meses de tristeza y angustia para mí, saber que mi madre salía rumbo a la embajada a ver a Leonardo, pero solo podía llegar hasta un par de metros de la reja, pues estaba rodeada de militares, en escasas ocasiones lo podía ver. Recuerdo que era muy angustiante y me apenaba mucho saber que mi madre salía, pero no sabía si volvería, las armas militares rondaban en mi cabeza sin cesar, siempre imagine que la matarían. Recibir nuevamente una noticia de esa naturaleza no lo soportaría.

Habían pasado días de mucha angustia, pues no sabíamos mucho de lo que pasaba con mis hermanos. Octubre fue lo mismo. Una tarde de noviembre, encontré que había tres hombres de terno conversando con mi papá en la puerta de la casa. Ingresé y vi en el living a mi madre sentada llorando desgarradamente junto a mi hermana Ángela. De pronto, y entre sollozos, escuché a mi madre pedirle que me dijera. Ángela me llevo de la mano al patio de la casa y con los ojos rojos de tanto llorar me dice que a Juanito lo habían encontrado muerto. La noticia me dejó en shock, no sabía qué decir, enmudecí. Recuerdo que Ángela luego fue a ver a mi madre y me quede solo en el patio. Camine de un lado a otro, no lograba entender ni hacer nada, junté unas tablas de cajones con los que jugaba y comencé a ver a Juan cuando en la puerta de la cocina que daba al patio me hablaba contando sus historias mientras yo jugaba, se me vino a la cabeza de inmediato cuando me preguntaba con un tono de gracia y picardía por qué me



Foja: 1

decían “Cotimba”, cuando yo lo miraba escribir en un cuaderno y leer un libro, para mí era muy inteligente, hoy puedo decir que aprendí tanto de Juan, fue un buen ejemplo en mi vida. Mi hermano y amigo. Era imposible imaginármelo muerto, ¿Por qué?, ¿Cómo sucedió?, ¿Qué le paso a Juanito?, ¿Quién le hizo eso?, si solo tenía 17 años. En adelante quedé con mucho temor a todas las noticias repentinas, hoy una llamada telefónica, una visita inusual, un llamado de mi jefatura en el lugar de trabajo significa tragedia, significa que hay una noticia que me afectará.

Comienzan muchas interrogantes que aparecen y rondan mi vida, el miedo que provocaron los militares cuando entran a mi casa, ver a un uniformado con fusil en mano en mi pieza, y esos señores de oscuro en la puerta de mi casa significan muerte, incertidumbre, tragedia, dolor, llanto y mucha pena. El silencio se apoderó de nuestra familia, hasta hoy no se quiere o cuesta mucho hablar de esto en familia, ha sido un verdadero trauma, conversar el tema se traduce en llanto y dolor en el pecho. Luego vienen navidades con mucha tristeza y angustia, fiestas sin ningún significado para la familia.

Sentí que me quedaba sin hermanos, Ángel en la cárcel, Leonardo se iría fuera del país y ahora Juan asesinado. Definitivamente me quedaba solo, pues con ellos llevaba una linda relación, sobre todo con Juan, con él tenía mucha confianza cuando aparecían las dudas de niño sobre las cosas que empezaba a vivir. Siempre vi en Juan alguien en quien apoyarme, alguien con quien dilucidar mis dudas. Fue aquel consejero, esa persona a quien recurrir sabiendo que siempre estaba con la respuesta correcta, la más adecuada. Resolvía mis dudas de niño, me ayudaba indicándome cómo enfrentar los problemas, a mirar siempre las cosas por el lado positivo.

A partir de la noticia que Ángela me diera en el patio de mi casa, me quedé solo viviendo con cuatro hermanas mujeres, Catalina ya se había casado y Ángela pronto lo hizo para iniciar una nueva vida. Traté innumerables veces de acercarme a mi padre como referente en mi vida, pero él estaba con mucho dolor y muy preocupado de tantas otras cosas. Definitivamente me quede sin la compañía masculina en casa. A mis 58 años he descubierto que toda esta trágica historia produjo un tremendo abismo con mis hermanos hombres, y es por ello que, en mi pasión radial, desarrolle un gusto por toda aquella música de las décadas de los sesenta y setenta, siempre pensando en los gustos musicales de mis hermanos.

Juan tuvo una gran importancia en el desarrollo de mis cortos años de vida. Mi cerebro está lleno de su imagen y las precisas palabras que me ayudaban a



Foja: 1

comprender mis inquietantes miradas de adolescente. Recuerdo muy bien su sonrisa generosa y limpia, moreno de labios gruesos y pelo ondeado. A veces miro a mi hijo Octavio que tiene la costumbre al hablar y mover sus pies impacientemente al mismo tiempo, parece estar más preocupado de sus pies que de las palabras, similar al cierre de la parka de Juan que en sus nerviosos discursos, tomaba para hacerlo subir y bajar al ritmo de sus palabras de joven vehemente.

En 1976, ingresé al Liceo de Aplicación en donde hice toda mi enseñanza media. Muchas veces ahí tuve que esconder mi historia familiar, por las razones políticas de la época. En innumerables actos cívicos tuve que disimular que entonaba las estrofas agregadas del himno nacional que eran obligación cantar. Me acongojaba tanto el cantarla como guardar silencio, no sé bien que me provocaba menos daño, pero en las dos situaciones un sentimiento de represión y temor me invadía. Era preso del silencio cuando estudiábamos la historia reciente, el temor siempre fue patente. Jamás tuve fuerzas para opinar sobre la contingencia, el miedo a la persecución era latente para todos, pero para mí era un tormento que me invadía como una congoja que me dejaba sin fuerzas. Sentía que una herida se abría. En época de colegio había muchas manifestaciones en conmemoración a la Junta Militar o actividades relacionadas, la asistencia era obligatoria y muchas veces valía parte de una nota. No ir en honor a mis hermanos o evitarme problemas eran un verdadero dilema, no asistía, pero el miedo me invadía. Siempre pensaba y me preguntaba, cómo voy a asistir y rendir honores a quien desmembró mi familia, a quienes nos provocaron tanto dolor y sembraron en mí un permanente miedo.

En el año 1982 ingresé a trabajar en el Registro Civil como digitador. Hasta 1990 fue un periodo muy complejo, no sabía con quién estaba conversando. Agentes de la Central Nacional de Inteligencia trabajaban junto a nosotros sin saber de su condición ni ellos de la mía. Una vez más debía guardar mi historia que ya se había transformado en mi propia vida truncada en ese plano, en el de comunicar y decir quién soy y de dónde vengo. Sentía al mismo tiempo como si con la muerte de mi hermano Juan, también habían asesinado una parte de mi propia vida. Por ningún motivo podía revelar esa parte de mi vida, debía dejarla en el secreto más absoluto. Comenzaba así a desencadenarse mi vida en el miedo constante.

En el mismo año que ingresé al Registro Civil, tuve la oportunidad de trabajar en la Radio José Miguel Carrera, CB96. Inicié así un mundo fascinante en la radiotelefonía que hasta hoy lo llevo en el alma como la profesión que más satisfacciones me ha producido. Pero nuevamente no quería conflictos que



Foja: 1

delataran mi historia y el miedo afloró ante la persecución que vivieron mis hermanos y que terminaron de manera trágica. Solo quería hablar de cosas que no me delataran en ningún sentido. En 1990 ingresé a la carrera de Administración Pública en la Universidad de Los Lagos de la ciudad de Osorno, fue complejo alejarme de mi casa, mi padre había fallecido y sentí que le podía hacer falta a mi madre. Ella con mucha sabiduría me dijo que me fuera a Osorno y estudiara, que eso me servirá para el resto de mi vida.

Varias veces quise tirar la toalla en los estudios, era muy sacrificado estudiar y trabajar, me estaba enfermando, comencé a perder el pelo, el sistema nervioso muy alterado. Todo era complicado cuando el sueldo alcanza para lo mínimo y el estudio empezaba a ponerse tedioso y pesado. Tenía que dejar de trabajar por un par de meses para dedicarme con mayor ahínco al estudio, y ahí estaba la radio para ayudarme a resolver mi alimento diario. Hacía lo que me apasionaba, me permitía literalmente comer y disponía de más tiempo para estudiar. Cada vez que bajaba los brazos mi hermano Juan volvía a mi vida con sus palabras y miraba el lado positivo de todo lo que hacía. Todo me indicaba que debía terminar mis estudios, como de igual forma no dejar el mundo de la radio.

En 1998 contraí matrimonio con Sandra, con quien tengo tres hijos. Terminé mi carrera y busqué la oportunidad de trabajo en el mismo Registro Civil. Ya estábamos en democracia, pensé que recién podía contar mi historia familiar, que ahora era el tiempo de sentirme más integrado. Pero en lo laboral se me hizo difícil. Las repercusiones de la historia de mi familia hicieron que, en mí, el temor fuera una constante, eso hasta pienso que pudiera ser natural. La creencia que me ocurriría lo mismo que a mis hermanos me frenaba. Tenía temor, no era infundado, solo no encontrar trabajo en la administración pública indicaba que era así. Me vi envuelto en desafortunados episodios que involucraban mi historia familiar y que significaron mucho malestar en mi situación laboral. Así vuelven, constantemente los mismos temores e incertidumbre que viví en 1973 cuando de un niño me comunicaron la detención de mi hermano Ángel, el asilo de Leonardo y el asesinato de Juan.

A mis 58 años de edad aun siento constantemente terror de perder trágicamente a mis hijos o a mi señora, o si algo les sucede, es reiterativa la idea de perder a uno de ellos, me imagino la situación y pienso qué haría si eso sucediera, qué sería de mi vida. Me sucede cuando mis hijos o Sandra están fuera de casa y recibo una llamada de un teléfono que es ajeno a mis contactos, aparece el miedo de recibir



Foja: 1

una mala noticia, vienen a mi cabeza la preocupación inmediata de qué debo hacer, cómo enfrentarlo”.

Relato de don Ángel Raúl Arias Quezada

“Mi nombre es Ángel Raúl Arias Quezada, nací en 1951 en la localidad de Linares, en la Séptima Región. Mis padres son Ángel y Adelina. Soy el segundo hijo y el hermano hombre mayor. Diez hermanos llegamos a conformar la familia Arias Quezada.

El año 1959 nuestro padre fue trasladado a Santiago, él trabajaba como oficial de secretaría en Carabineros de Chile. Nuestros padres nos criaron con gran dedicación, esfuerzos y mucho más para educarnos. Para nuestro padre primaba, como primera responsabilidad, la dedicación por los estudios. De esta manera, desde muy pequeños, sentimos que esa iba a ser una responsabilidad a la que debíamos asumir conscientes que era la única manera de revertir la precariedad económica que observábamos en nuestra familia.

Llegamos a Santiago, yo de 10 años, Leonardo de 6 y Juan de 5 años. Vivíamos en la calle Ricardo Cumming a pocas cuadras de Balmaceda. Siempre los tres salíamos a recorrer el mundo que giraba entre las calles Balmaceda, Ricardo Cumming y Matucana. La cercanía que nos permitía nuestras edades nos convirtió en tres hermanos que íbamos a compartir cada acontecimiento como si fuéramos uno.

Terminada mi educación media, en 1969, postulé a la Universidad Técnica del Estado para comenzar mis estudios superiores de Publicidad en 1970. En 1969 había nacido mi hija Paula, por tanto, debía trabajar y estudiar, y por esa razón tuve que estudiar en horario vespertino. Contraí matrimonio en mayo de 1972 con la madre de mi hija. Tuve que asumir las responsabilidades como esposo y padre, además del cumplimiento de mi actividad como estudiante.

Con el golpe de Estado comenzamos a sufrir, con todas sus formas, la represión desatada en Chile. El 16 de septiembre de 1973 fui detenido por detectives del Servicio de Investigaciones de Chile, hoy PDI. Leonardo logró asilarse en la residencia del embajador de México a comienzos de noviembre de 1973. Juan, cuando buscaba asilo en alguna embajada, fue detenido y asesinado el 27 de noviembre del mismo año. Junto a él asesinaron a sus amigos Juan Carlos Merino Figueroa, Juan Jonás Díaz López, al ciudadano vietnamita Que Phuong Tran Huynh y Mario Zamorano Cortés.



Foja: 1

Para nuestra familia se daba comienzo al dolor tormentoso que provoca el asesinato, el presidio y el exilio. Nuestra madre, Adelina Quezada Pacheco, el 3 de diciembre de 1973, le escribió una carta al general de División y ministro del Interior de la Junta Militar, Óscar Bonilla. En el primer punto le dijo: “El miércoles 21 de noviembre de 1973 se presentaron a mi hogar unos señores militares del regimiento Tacna con orden de detención por un soplo contra mi hijo Juan Domingo Arias Quezada, quien al verlos arrancó desesperado pues sabía cómo los trataban por otros amigos que habían estado presos. No supe más de él hasta el miércoles 28 de noviembre de 1973, a las 18:30 horas cuando agentes de Investigaciones me lo devolvieron totalmente torturado y masacrado su cráneo”.

Dentro del punto dos le preguntó al ministro del Interior Bonilla: “Por otra parte, los señores de Investigaciones, después de todo lo que hicieron con mi hijo, se presentaron el domingo 2 de diciembre de 1973 en mi domicilio para arrestarlo ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Les parece poco lo que nos han hecho sufrir? Por favor, señor Ministro, pidan que dejen descansar en paz a mi hijo”. Luego, en el punto tres, exigió al ministro de Pinochet: “Señor Ministro, no quiero que me conteste palabras de consuelo, pues mi dolor es tan grande que nadie me va a conformar, yo solo quiero hechos, ya que nadie en el mundo me devolverá la vida de Juanito. Le ruego a usted que mi hijo Ángel quede en libertad, aunque sea condicional o arresto domiciliario para tenerlo a mi lado y saber que está vivo y en buenas condiciones físicas, como moralmente y así podré mitigar en algo el gran dolor como madre que siento en estos momentos...”. No hubo respuesta a su carta de petición.

A fines de noviembre de 1973, luego del cierre del Estadio Nacional como centro de detención, fui conducido al Estadio Chile en su reapertura como lugar de detención. En este lugar de detención dormía en la cancha del estadio bajo los focos que nos iluminaban día y noche. El ajeteo era incesante durante la noche. Los detenidos llegaban a cada instante, a ellos les consultaba sobre mi hermano Juan Domingo y Leonardo como una manera de saber de su suerte. No tuve información alguna. Solo sospechaba que una tragedia había sucedido.

Mis padres lograron hacerme llegar ropa y algún alimento. En las encomiendas venía información por escrito del asilo de mi hermano Leonardo y otros que me comunicaban de manera confusa lo sucedido con mi hermano Juan: Tu hermano Juan no podrá ir a estudiar y luego otros que definitivamente hicieron que me enterara de su muerte: Tu hermano Juan nunca más podrá ir a estudiar.



Foja: 1

A mediados de diciembre de 1973, luego de dos meses y 15 días, pude ser visitado por mi padre debido a mi traslado al campo de detenidos de la oficina salitrera Chacabuco, en el desierto de Atacama. En el Estadio Chile y separados por un mesón, me comunicó el asesinato de mi hermano Juan Domingo y el asilo de mi hermano Leonardo en la residencia del embajador de México. Estos dramáticos hechos desataron la congoja, mi pánico, el desamparo y la incertidumbre que iba a tener que soportar de noche y de día tirado en la cancha deportiva privado de libertad y a horas de llevarme a 1.300 kilómetros alejados de mi familia y de mi hija Paula de cuatro años. Así, desde mi presidio y la incertidumbre de no saber cuándo iba a lograr mi libertad, me enfrentaba ahora a las razones y circunstancias del asesinato de Juan y del refugio de mi hermano Leonardo en una embajada y su posterior exilio. Cada vez los hechos me angustiaban, me estrangulaban alejado del dolor, el sufrimiento de mi familia y el desamparo de mi hija y de mi esposa.

Ya en libertad, en octubre de 1974, con el dolor de la muerte violenta que era parte de mi vida y el desamparo frente a la evidencia de estar en libertad, mi vida se llenó de momentos de pánico y el letargo se fue apoderando de mi quehacer diario. Ni con mis padres ni con mis hermanos y hermanas este dolor podría atenuarse, menos para ser conversarlo como una forma de reencontrarnos como familia atravesada con esta desgracia. Nadie estaba para volver a abrir las heridas que dejó la muerte violenta del hijo y hermano de 17 años. Encontrarme con alguna fotografía de mi hermano era una vuelta al dolor para mi madre. No se las podía compartir con ella. Solamente debía atesorarlas en una caja como si fuera un sarcófago al que solamente yo podía acceder. Cada uno de nosotros escondíamos nuestro dolor para no afectar al otro y tratábamos que el conjunto siguiera siendo, de alguna manera, una familia.

El año 1974, algo así como en diciembre, ingresé al Juzgado de Avenida España, al llegar a Alameda. Solicité el proceso que se había iniciado en noviembre de 1973 por los hechos que terminaron con el asesinato de mi hermano, y que se cerró en espera de nuevos antecedentes en diciembre del mismo año. Las fotografías de su cuerpo inerte, sus vestimentas hechas jirones, amarrados, amordazados y torturados daban a conocer con este testimonio de la brutalidad de los uniformados. Encontré las declaraciones de mi padre, la esposa del ciudadano vietnamita, la hermana de Mario Zamorano, las declaraciones de la hermana de Juan Carlos. Las declaraciones de los vecinos del lugar que indicaban los detalles de las horas, los sonidos que escuchaban tras las paredes y ventanas; el horror desatado tras el paso de la camioneta que avanzaba a las 23



Foja: 1

horas del 27 de noviembre por la calle El Cajón en el sector de Lo Barnechea; la del arriero que encontró los cadáveres, la del teniente de Carabineros, Sergio Iván Gálvez Álvarez, que inició los trámites legales de la matanza clandestina al llamar al sitio de los hechos a la Brigada de Homicidios de Investigaciones. El 29 de noviembre de 1973 el juez Alberto Albónico Munizaga del Sexto Juzgado del Crimen abrió el proceso Rol N° 89.625. Y luego “se cerró en espera de nuevos antecedentes”. Esa frase determina que la mayor injusticia, la más elemental, es no saber qué sucedió.

Sentía la imposibilidad de investigar. Me abrumaba saber que a nadie le importara que cinco seres humanos hubieran sido masacrados al amparo de la noche bajo las condiciones del Estado de Sitio. Me era incomprensible entender que nunca se iba a saber la verdad. Todo se tradujo en querer asumir la responsabilidad de saber cómo y quiénes le quitaron la vida a mi hermano y a cuatro seres humanos más. El torbellino de la presencia de la muerte comenzaba a darle un sentido determinante a mi vida. Solo era importante esta desgracia que me aletargaba, mientras la adversidad económica que me agobiaba cada día más.

Inicié los trámites para poder retomar mis estudios en la Universidad en donde había dejado de estudiar hace un año. De esta manera trataba de rehacer mi vida al continuar mis estudios. Fue imposible, me fue negada esta posibilidad de volver a estudiar.

Todo había cambiado para no volver a ser como antes. Era imposible revertirlo. Nada había hecho para que fuera así. Sentía la amargura del hermano asesinado, el peso del dolor y la ausencia de los lugares compartidos. Solo encontré un cuaderno lleno de contenidos para decirme que una vez estuvimos ahí entre ese trazo del lápiz y la huella dejada en el papel.

Salí a las calles a recorrer los espacios que compartimos y la ausencia adquirió una forma que se tradujo en una búsqueda incesante hasta el delirio de recorrer calles, esas que debió recorrer en busca de asilo. Busqué entre los árboles y las fachadas cualquier indicio de sus pasos. Volvía una y otra vez a lo mismo. Quería escuchar, oler, sentir o ver. Sentía el pánico y la frustración de no encontrar lo que buscaba. Buscaba la verdad que me diera cierta tranquilidad, la que aquietaba el alma y los sentidos, esa que me tranquilizó torpemente al saber que por lo menos el cuerpo de mi hermano estaba bajo una lápida con su nombre y apellido, fechas de nacimiento y la de su muerte. Y seguí buscando esos nuevos antecedentes que permitirían abrir el proceso en busca de las verdades. Pero solo unas pequeñas se fueron urdiendo.



Foja: 1

No tenía conciencia de estar vivo y menos sentirme en libertad. Me sentía en una cárcel mayor. El desamparo abrumador se empezó a acentuar e impedía sentirme haciendo algo. Esa fue mi realidad de finales de los años de 1970, todos los de 1980, y lo mismo en los de 1990. Las reiteradas imágenes de mi hermano se confundían con los episodios del presidio que tuve que vivir yo. La insistencia de las consecuencias que determinan un asesinato, mi presidio y el exilio de Leonardo marcan el tiempo vivido, dejando la sensación continua de seguir en una prisión y paralizado frente a un abismo. Mi vida, extraña y sin sentidos, se mostraba. Todo era torpe. Me encerré para evitar darme cuenta que estaba con vida en un mundo donde todo giraba en el vacío. Seguía ahora en mi presidio mental, quizás toda mi vida o bien hasta encontrarme con el instante de la vida perdida de Juan. Pero trataba de cruzar la frontera. Buscaba el sentido para seguir viviendo.

No logré rehacer mi vida familiar. Los lazos sentimentales se rompieron. Sufrí el deterioro anímico, la postergación de mi proyecto de vida y de mis afectos. El aislamiento terminó por socavar cualquier intento inmediato para recomponerme como ser humano, padre y esposo. Mi situación laboral se transformó en una constante actividad irregular, privada de protección previsional, leyes laborales. Siempre fue la búsqueda para resolver el día a día. Cada mes tenía siete días; empezaba el lunes y terminaba el domingo, era la manera de poder organizar y controlar la subsistencia. Todo era menos importante que la desgraciada adversidad.

Logré sobrevivir 47 años más. Pasé ese tiempo encerrado en los espacios que me permitió solo mi familia. Fue sobrevivir en la incertidumbre, para Leonardo el destierro, para mi hermano Juan la muerte más atroz. La vida se dio en parámetros tan diversos que a veces no me interesaba porque solo sobrevivía en la ansiedad. Y pasaron 47 años y más años pasarán así de dramáticos, quizás esa es la huella más dolorosa, sentir que es así y nunca será de otra manera.

Al reencontrarme con el tiempo vivido, siento los momentos arrastrados por el dolor, el pánico y el desamparo. Sin los amigos que hacen afable la vida, sin los compañeros de secundaria o bien los de universidad. Todo diezmado. Sin ánimo de hacer nuevos amigos. Solo buscando en ninguna parte la vida que ha sido ausencia y desamparo.

He aprendido a soportar este plano en el que me pusieron para convivir solo con mi intimidad. He llegado a sentir que es natural vivir con ansiedad y en la precariedad que me provoca el pánico y letargo a la vez. Entonces me encierro



Foja: 1

para evitar darme cuenta que sigo con vida en un mundo donde todo sigue girando. Soy un sobreviviente que convive con mis 69 años diluidos en esta realidad”.

Relato de don Leonardo Antonio Arias Quezada

“Llegué a Santiago junto a mi familia en el año 1960, tiempo en que inicié mis estudios básicos y mis primeras amistades en la escuela y en el barrio de la Población San Joaquín. Yo había nacido en Linares.

Viví en la Población San Joaquín, en la comuna de San Miguel para ese entonces, hasta los 18 años. Cursé la enseñanza básica, en parte, en una escuela de la población. Cuando pasé a cuarto año de educación básica, mi padre me inscribió en el Liceo Amunátegui de Santiago, donde cursé el cuarto medio hasta septiembre del año 1973. Me vi obligado a abandonar mis estudios en ese mes, producto del Golpe Militar y la violencia desatada luego de este.

Pedí asilo político en la Residencia del Embajador de México en Santiago de Chile el día 20 de noviembre de 1973, lugar donde permanecí seis meses para viajar el día 1 de junio de 1974 a México. Mientras esperaba, a comienzos de diciembre del año 1973, tuve la visita de mi madre quien, con inmensa tristeza, me comunicó sobre el asesinato de mi hermano Juan Domingo junto a cuatro personas más. El impacto de esta noticia fue tan grande que estuve mucho tiempo en un estado profundamente depresivo. Perdí muchos kilos y mi apetito disminuyó durante la mayor parte del tiempo que estuve en la residencia. Hubo momentos en que fui obligado a ingerir alimentos ya que la mayor parte del día dormía como una forma de evadir mis pensamientos siempre recurrentes acerca del asesinato de Juan Domingo. Era tal mi obsesión por mi hermano que todos mis pensamientos estaban basados en la pregunta del por qué no lo obligue a que pidiéramos asilo juntos. Con Juan Domingo conversé por última vez el día 19 de noviembre de 1973, le comenté que existía una posibilidad de pedir asilo a lo que me respondió que él se quedaba en Chile y que no era cobarde. Esta respuesta fue la que me impulsó a no insistirle de que nos fuéramos juntos a pedir asilo, y justamente en base a esta situación fue que mi recriminación conmigo mismo me ha perseguido durante toda mi vida. Antepuse una supuesta ofensa para no insistirle en que juntos pidiéramos asilo: me hizo sentir que yo era un cobarde.

En la estadía en la residencia prevaleció en mí la figura de mi hermano Juan, todos los días pensaba en él y la forma en que fue asesinado, de repente me daban ganas de salir de la residencia y desaparecer. Algún tiempo después



Foja: 1

comenzó en mí el pánico de la idea de que mi hermano Ángel podría ser asesinado también, nosotros éramos muy activos militantes del Partido Socialista en la Población. Me costaba entender que ni a Ángel ni a mí nos hicieran algo peor, pensaba que Juan valientemente soportó los salvajes tormentos a los que fue sometido. Hoy pienso que fue imposible que haya soportado el maltrato, tenía tan solo 17 años. Pienso que esta forma de pensar llevó, de una u otra manera, a formarme una imagen superior de Juan y de las otras personas que murieron con él, lo que provoco en mí un sentimiento de minusvalía: en muchas oportunidades he preferido rehuir para no enfrentar situaciones en que tendría que haber una respuesta, aunque sea verbal, ante momentos de agresión hacia mi persona, optando por no decir nada. Me da temor la agresión, hasta me he sorprendido en situaciones en que busco el conflicto de manera indirecta para después evitarlo dando explicaciones para dar a entender que interpretaron mal mi actuar. Mi estadía en la residencia, mi eterna espera por el asilo, fue marcada por los recuerdos llenos de dolor relacionados con Juan y muchas veces la burla de los demás asilados por no superar la muerte de mi hermano.

Al llegar a México fuimos destinados a un hotel del centro de la ciudad en donde me tocó convivir con otra persona más en un dormitorio durante dos semanas. Después, por iniciativa propia, decidí pedir el traslado a la unidad habitacional que estaba destinada para los asilados políticos. Mi decisión se basó principalmente en estar tranquilo e iniciar una nueva vida después de haber convivido durante un largo tiempo en un ambiente poco adecuado. Principalmente anhelaba iniciar una vida "normal" y superar el dolor que me producía el asesinato de Juan Domingo, dolor que subsistía desde el día que fui informado por mi madre de los hechos.

Desde que solicité el asilo no hubo ninguna relación de amistad con las personas que me toco convivir ya que el diario vivir se desarrollaba en un ambiente de mucha desconfianza, temor y dolor. Siempre pensé que la situación sería diferente una vez llegando a México, sin embargo, todo continuó en un ambiente igual al que había vivido durante seis meses en la residencia del embajador. Incluso más aún, se acentuó la desconfianza y las agresiones ya que los problemas de adaptación a mi nueva realidad se prestaban para el desarrollo de un ambiente inadecuado y no poder vivir tranquilo.

Todas mis actividades, tanto laborales como educativas, han estado marcadas por mi falta de interés y ánimo, en la actualidad tengo que hacer un gran esfuerzo para concluir tareas. He llegado a estas conclusiones comparándome con otros chilenos que viven aquí en México y que son de mi edad o mayores, la gran



Foja: 1

mayoría de ellos gozan de una situación económica estable y con jubilaciones, por lo que pienso que se generó en mí una falta de interés para con mi persona producto del impacto emocional por la muerte de mi hermano.

De todas formas, impulsado y apoyado por un amigo chileno, ingresé a estudiar la secundaria, lugar donde conocí a mi esposa. Al año de mantener una relación amorosa, le pedí que nos casáramos ante mi premura de compartir con alguien mi vida solitaria y el deseo de tener una familia para intentar superar lo sucedido. Tuvimos nuestro primer hijo, situación que me llevo a calmar en parte mis angustias y aprehensiones exageradas.

Con el paso de los años comenzó el reclamo de mi esposa, luego de nacido mi segundo hijo, por mi tendencia a “distraerme y relajarme los fines de semana” ingiriendo alcohol en cantidades excesivas. Nunca me había dado cuenta, y no me recordaba al otro día, que en mis momentos de embriaguez hablaba de mi hermano Juan, golpeaba el closet y gritaba que algún día me iba a vengar. Me comentó que mis hijos se llenaban de temor cuando me veían fuera de mí mismo. Me empecé a dar cuenta que mis hijos me veían con temor, mi intuición me decía que algo no funcionaba bien en la relación matrimonial. Hoy en día mantengo comunicación muy relativa con mi hijo mayor, he percibido cierto distanciamiento y frialdad de su parte, he tratado reiniciar una relación de mayor comunicación y afectividad con escasos resultados. Mi hijo mayor vive alejado de nosotros, al menos de mí.

Ante toda esta situación mi esposa exageró el cuidado de ambos hijos y comenzó a estrechar exageradamente su relación con nuestro hijo menor. A pesar de todo, mi hijo menor logró titularse y hoy solventa sin problema su economía. Mi hijo mayor no logró estudiar una carrera universitaria. Todo lo que viví afectó profundamente mi vida familiar.

En 1983, recibí la noticia del fallecimiento de mi padre. Mi hermana Ángela fue la encargada de comunicármelo recién dos meses después de sucedido. Nunca pude hablar con él vía telefónica y la única vez que logré comunicarme con él me dijo que me cuidara y estudiara, no pude hablar más ya que lo evitó. En alguna ocasión le pedí a mi esposa que le enviara una carta que escribí para él, nunca recibí respuesta alguna, mi madre me mencionó que cuando mi padre leyó la carta lloró amargamente.

Con cierto grado de dificultad pude terminar mi carrera de psicología mientras me desempeñaba como auxiliar administrativo en el sistema penitenciario, lo que me



Foja: 1

permitía mantener medianamente a mi familia, siempre con la gran ayuda económica de mi esposa. Terminada mi carrera no pude ejercer legalmente hasta el año 2002 ya que no se me autorizaba mi permiso de ejercer por mi situación migratoria. Mi desempeño laboral hasta el día de hoy ha sido ajeno a mi carrera, distinto a lo que estudié.

Extrañaba mucho a mi familia de Chile, necesitaba comunicarme con mi madre y mis hermanos, pero mis comunicaciones por medio de cartas eran muy alejadas llegando yo incluso a pensar que se habían olvidado de mí al tratar de evitar el recuerdo que les producía, especialmente por recordarles a mi hermano Juan y el dolor que esto les provocaba. Pasaron 20 años hasta constatar, por la visita de mi hermana Mercedes, que mis preocupaciones eran ciertas, que sobre mí y Juan no se podía hablar en la casa porque era demasiado doloroso. Pasaron 20 años para yo poder ver al fin a algún familiar.

Después de aquella visita decidí volver a visitar Chile. Cuatro meses después me subía a un avión camino a mi país, después de 20 largos y amargos años de exilio. Hasta ese momento no había sido capaz de volver, por todo lo que implicaba. Recuerdo que, si bien mi estadía fue de cierta alegría por volver a estar junto a mi familia, también estuvo marcada por momentos de angustia y tristeza ya que nunca se llegó a hablar de Juan Domingo y en el momento que algo se relacionaba con él, se evitaba hablar. Para mí fue un desconcierto y me volvieron los estados depresivos. Alguna vez pensé que con mis familiares podría conversar el tema de Juan abiertamente, algo necesario para poder sanar, y ya que con mi esposa medianamente podía hacerlo porque no entendía todo lo que había pasado. Hasta hoy siento la necesidad de hablar de Juan Domingo con alguien que muestre empatía y comprensión, situación que he logrado solo parcialmente.

Al regresar a Chile junto a mi esposa e hijos en 1995, se me produjo un impacto debido al gran cambio que pude ver en mi familia. Todos diferentes y fríos en el trato, seguramente por un reencuentro en que ambas partes no nos conocíamos y empezaríamos recién a conocernos nuevamente. Fue muy equivocada mi percepción ya que nunca pude hablar con ellos acerca del tema de Juan, que era lo que de alguna manera me interesaba. Nunca pude hablar con ellos lo que sentía.

Mi estadía en Chile estuvo copada de actividades de mi vida laboral y la revalidación de mi título. Primero obtuve permiso para ejercer en Chile. Mi vida familiar con mi esposa e hijos fue estable, pero sin dejar de mencionar los constantes llamados de las autoridades educativas con respecto a la conducta



Foja: 1

desadaptada de mi hijo mayor en la escuela y también de su bajo rendimiento. Mi esposa expresaba la necesidad de regresar a México, igualmente yo. Decidimos regresar en el año 1999 impulsados por mi inadaptación al medio y la intranquilidad que me producía el no poder desempeñarme laboral y administrativamente: no podía iniciar actividades en impuestos internos debido a que usurparon mi nombre, atribuyéndome una deuda considerable de impuestos. Levanté una demanda en el juzgado correspondiente por usurpación de identidad, así lo llamó la autoridad; en mis citas a declarar fui careado y humillado. La situación se aclaró a mi favor tres años después de haber llegado a México.

Ya en México pude iniciar contacto vía internet con mi hermana mayor que fue la que vivió en carne propia el tener que reconocer el cadáver de mi hermano. Sentía la necesidad de saber acerca de los sucesos, a través de los años logré que mi hermana pudiera comunicarme lo que le tocó vivir. El cuerpo de Juan estaba torturado, tenía quemaduras en sus testículos y cara y le faltaban dedos en sus pies. El impacto fue de tal dimensión que se me producían dolores reflejos de lo que Juan seguramente sintió en los momentos de los tormentos. Decidí no seguir preguntando acerca de lo sucedido ya que cada vez que lo hacía vivía lo que me imaginaba y sentía lo que seguramente sintió Juan. Decidí buscar una forma de poder actuar en forma concreta ante el tormento que se me producía: retomé la labor que, en algún momento, mi hermano Ángel habría iniciado. Me querellé en la causa criminal seguida por los crímenes cometidos en la persona de Juan, causa que sigue abierta y se encuentra en estado de sumario.

El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocido como "Informe Rettig", ha establecido respecto a Juan Domingo Arias Quezada, lo siguiente: "El 26 de noviembre de 1973, fueron ejecutadas las siguientes personas: - Juan Domingo ARIAS QUEZADA, 17 años, soltero, estudiante, militante del Partido Socialista, del núcleo José Martí. - Mario Francisco ZAMORANO CORTES, 33 años, soltero estudiante, militante del Partido Socialista, del núcleo José Martí. - Juan Carlos MERINO FIGUEROA, militante del Partido Socialista, del núcleo José Martí. - Juan Jonas DIAZ LOPEZ, 24 años, estudiante, militante del Partido Socialista de Osorno. - Que Phung TRAN HUYNH, vietnamita, Doctor en bioquímica y medicina nuclear. En la madrugada del día 27 de noviembre, vecinos de El Arrayán escucharon la subida por el camino de un vehículo pesado, y alrededor de las 04:00 horas, múltiples disparos. En el transcurso del mismo día, los cuerpos sin vida de todos los señalados, fueron encontrados por un vecino en la Parcela N° 38 de El Arrayán con una



Foja: 1

leyenda alusiva al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde son sindicados como “traidores”.

En los respectivos protocolos de autopsia, se determinó que murieron por múltiples impactos de bala de grueso calibre. Varios de los cuerpos presentaban lesiones distintas a las provocadas por los proyectiles, tales como “escoriaciones multiformes distribuidas en la región frontal derecha”, “múltiples traumatismos, en múltiples regiones del cuerpo, provocadas por cuerpos contundentes y cuerpos candentes”, y “múltiples lesiones equimóticas en diversas zonas del cuerpo”. Además de lo indicado, dichos protocolos indican que dos de ellos se encontraban amarrados. Según relatan familiares, de acuerdo a indagaciones realizadas por ellos, el grupo habría intentado asilarse en una embajada, siendo sorprendidos por una patrulla militar, la que los habría detenido.

También según relato de familiares, uno de los afectados había sido buscado en su domicilio en los días previos por militares del Regimiento Tacna, quienes dijeron que debía presentarse en esa unidad militar.

Teniendo presente que por los testimonios conocidos, y los informes de autopsia, ha quedado establecido que fueron ejecutados durante la vigencia del toque de queda, con armas de grueso calibre, y que además sus cuerpos presentaban lesiones compatibles con apremios anteriores a la muerte, y la circunstancia que al menos uno de ellos había sido buscado por efectivos militares en los días previos, a lo que se agrega la común militancia política y las características generales del período en que ocurren estos hechos, la Comisión ha llegado a la convicción que estas personas fueron ejecutadas por agentes del Estado, siendo víctimas de una grave violación de su derecho a la vida.”

Actualmente se encuentra en tramitación una causa criminal por estos hechos, sustanciada por el Ministro en Visita Extraordinaria de la Il. Corte de Apelaciones de Santiago, Sr. Mario Carroza Espinosa, causa Rol 91-2011, y se encuentra en estado de sumario”.

Respecto al derecho, señala en primer lugar que los antecedentes previamente consignados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional como de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998.



Foja: 1

Cita a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la que ha establecido que *“resulta una exigencia previa determinar la fuente u origen de la acción impetrada por los actores [...] lo anterior tiene su fundamento en la existencia de un ilícito y las normas pertinentes, conducirán necesariamente a razonar acerca de la identidad y naturaleza del delito “contra la humanidad o de lesa humanidad”, tal como se ha calificado la infracción penal en cuestión por la doctrina penal nacional e internacional”* (Cfr. I. Corte de Apelaciones de Santiago, 16.11.06, “Ruz y otro con Fisco de Chile”, Rol N° 4.464-01, Considerando N° 2.)

En segundo lugar y respecto a la Responsabilidad del Estado, señala que el artículo 38, inciso 2, de la Constitución Política de la República señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado, podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Este precepto consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad, provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica.

Menciona que la Excelentísima Corte Suprema, ha sentenciado que: *“la responsabilidad del Estado por actos de la administración [...] emana de la naturaleza misma de esa actividad estatal, en cuanto organización jurídica y política de la comunidad y de las variadas acciones que debe desarrollar en el ámbito de las funciones que les corresponde llevar a cabo para el cumplimiento de los fines y deberes reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Política, para lo cual debe hacer uso de todas las potestades y medios jurídicos y materiales que ella le otorga, lo que hace que las distintas responsabilidades que puedan causar esas acciones, se sometan a normas y principios de la rama del derecho público”*. (Cfr. E. Corte Suprema, 26.01.5, “Bustos Riquelme con Fisco de Chile”, Rol N° 3.354-03, Considerando N° 11.)

Sostiene, que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, y todas ellas -cuando menos- son normas propias del ámbito del derecho público.

Comenta, que en el caso “Caro con Fisco”, la Corte Suprema ha sentenciado: *“que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad del Estado, si bien se ha consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República no indica cuál es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4 del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido*



Foja: 1

coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de bases generales de la administración del Estado. Esta disposición previene, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado.” (Cfr. E. Corte Suprema, 19.10.5, “Caro Silva con Fisco de Chile”, Rol N°4004-2003, Considerando N° 6.)

Añade, por otra parte, en el caso “Albornoz con Ortiz y Fisco” se refuerza la misma idea, esto es: *“que, tal como lo ha decidido anteriormente esta Corte, la responsabilidad del Estado por los daños que causen los órganos de su administración enunciada en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración, es de derecho público y de carácter genérico, por emanar de la naturaleza misma de su actividad en el ámbito de las funciones que le corresponde llevar a cabo para los fines que le cometen la Constitución Política y las leyes, para lo cual debe hacer uso de las potestades, medios y acciones materiales conducentes a ellos.”* (Cfr. E. Corte Suprema, 13.12.05, “Albornoz con Ortiz y Fisco de Chile”, Rol N° 4006-2003, Considerando nº19).

Argumenta, que para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan la presente demanda, resulta necesario remitirse al Capítulo I de la Constitución Política de la República sobre las Bases de la Institucionalidad. Detalla, que allí el constituyente desarrolla los principios basales desde donde se estructura todo el sistema institucional. Así, el artículo que da inicio a nuestra Carta Primera en su inciso 4 prescribe que *“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”*. En concordancia con lo anterior, el artículo 5 reafirma -en su inciso 2- que *“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”*.

Expresa, que la conjunción de ambos preceptos resume la doctrina completa del constitucionalismo, o sea, del poder limitado por el Derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano. (Cfr: Cea, José Luís. Derecho Constitucional Chileno. Tomo I. Ediciones Universidad Católica de Chile. 2002. Pág. 210).



Foja: 1

Afirma, que las disposiciones reseñadas en conjunto con los artículos 6 y 7 de la Constitución, que a su vez establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad que como ha quedado en evidencia, emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

Insiste que, este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el derecho internacional humanitario así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos del cual el Estado de Chile forma parte, mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (artículo 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia) ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derechos esenciales del hombre” por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Expone que todo lo anterior, esto es, el desarrollo de este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Sostiene, que la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de



Foja: 1

una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente. (Cfr. Aguiar, Asdrúbal. La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 17, IIDH, 1993. Pág. 25). Se trata en consecuencia de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

Señala, que el Código Político reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, obligándose ante la comunidad internacional a su efectiva vigencia a través del artículo 5, inciso 2, que sanciona e incorpora toda la normativa internacional aplicable en la especie. En igual sentido, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reza: *“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”*.

Por último, menciona que el artículo 19, N° 20 de la Carta Fundamental indica que *“la Constitución asegura a todas las personas la igual repartición de las cargas públicas”*. Aquí se consagra la idea básica según la cual nadie está obligado a soportar una carga que no haya sido establecida por la ley, ni aun en pro del bien común, como lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Respecto a la improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, señala que el estatuto de daños contenido en el Código Civil, se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses.

Agrega, que la diferencia entre uno y otro sistema de responsabilidad es evidente. Hace presente que: *“es claro que el perjuicio causado a un particular por otro o por el Estado en cuanto sujeto de relaciones privadas, es diverso al perjuicio que*



Foja: 1

se le puede causar a un particular por una actuación ilícita y dañosa de un Estado con relación a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana.”

(Cfr. Nash, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 2004. Pág. 23).

Cita pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y expone un conjunto de razones de texto que permiten sostener porqué el derecho de daños del Código Civil chileno, es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana. Tales razones son las siguientes:

1.- Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Comenta que el Título XXXV del Libro IV del Código Civil, no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado -cuestión, por cierto, inimaginable en los tiempos de Andrés Bello- destinada a exterminar a un número importante de la población nacional sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del artículo 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste -“secuestro calificado”- el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional.

2.- Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello, fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (Art.2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (Art.2321); edificios en ruinas (Art.2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (Art.2326 y Art. 2327). Demás está decir que la regla del artículo 2322 -sobre la relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. De la misma manera, aunque existe una norma que parece más pertinente a este asunto concreto –el caso de quien dispara armas de fuego de manera imprudente (Art.2329, N°1)- con todo, dicha regla también es inadecuada para resolver casos de violaciones intencionales, masivas y sistemáticas a los derechos esenciales de un sector no menor de habitantes del Estado.

Respecto a la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, explica que la materia



Foja: 1

de qué trata la presente causa, quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional -por sobre las meramente privadas-, implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado, sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Comenta, que en toda sociedad democrática y respetuosa de la libertades de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona -derechos que, por lo demás, se hallan protegidos por los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana de sobre Derechos Humanos y por los N° 1 y 7 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental- constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

Añade, que por su parte, la citada Convención Americana -tratado internacional ratificado por Chile y actualmente vigente en su territorio por la vía del artículo 5 inciso 2, de la Constitución Política- señala con claridad la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha Convención.

Expresa que, si bien es efectivo que en ninguna disposición de la Convención Americana se señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte la ausencia de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del Derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Administrativo y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así se encuentra establecido en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, al disponer que: *“La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: [...] c) los principios generales del Derecho reconocido por las naciones civilizadas”*. *[Tales] principios generales del Derecho [...] reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos*. (Cfr. E. Corte Suprema, 14.10.2009, “López con Fisco de Chile”, Rol N° 5570-2007, voto disidente del Ministro Sr. Sergio Muñoz Gajardo, considerando N° 18.)



Foja: 1

Al respecto, hace presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -haciendo suyo el razonamiento fijado por la Corte de La Haya desde los albores del Siglo XX- ha establecido que: *“es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado “incluso una concepción general del derecho”, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (...) la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”*. (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez. Indemnización compensatoria. [Art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos], Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C, N° 7. Párr. 25-26).

Por lo anterior, resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano al interior del sistema interamericano (del cual, Chile, por cierto, es parte) trae aparejada la obligación de reparar el mal causado. En esta materia la norma rectora es el artículo 63 del Pacto de San José. (Cfr. I. Corte de Apelaciones de Santiago, 18.01.06, “Marfull González con Pinochet Ugarte”, Rol N° 37.483-2004, Considerando N°18.)

Por lo tanto, en Chile -dada su calidad de Estado miembro del sistema interamericano- la lógica que debiera operar en casos de violaciones de derecho humanos de alguna persona tendría que ser la misma: reparar íntegramente el mal causado. Obligación ésta del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber: el principio pro homine, entendiendo por tal la interpretación de sus preceptos en el sentido más favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros. (Cfr. Nikken, P. “El concepto de derechos humanos”, en Estudios Básicos de Derechos Humanos, I.I.D.H., Costa Rica, 1994. pp. 15-17.)

Hace presente también, que sobre el citado artículo 63 de la Convención Americana, también se ha dicho que: *“ese precepto acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la*



Foja: 1

responsabilidad de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. (...) la reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, el tribunal internacional debe determinar las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer la indemnización que compense por los daños ocasionados. El Estado obligado no puede invocar disposiciones de derecho interno para modificar o incumplir la obligación de reparar. Esta queda sujeta en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) al derecho internacional.” (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Masacre plan de Sánchez”. Reparaciones. [Art. 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie N° 116. Párrs. 52-53).

Afirma, que tal es la conclusión que fluye de una revisión somera de la extensa reglamentación internacional sobre la materia. Indica, que ya en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 de Convenio IV de La Haya relativo a las “Leyes y costumbres de la guerra terrestre” (de 1907) dispone la obligación de las Altas Partes contratantes de pagar una indemnización en caso de violación de sus normas. Idéntica concepción recogen los Convenios de Ginebra de 1949 ratificados por Chile el año 1951, particularmente en los artículos 68, relativo al trato de los prisioneros de guerra y 55, que versa sobre protección de las personas civiles en tiempo de guerra, así como en el artículo 91 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Así también cabe mencionar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, instrumento no ratificado por Chile, pero cuya obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de ius cogens. (Cfr. E. Corte Suprema 13.12.2006, “Caso Molco”, Rol N° 559-2004. Considerando N° 19). En fin, vale reparar en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Decreto Supremo N° 144 publicado el 1o de Agosto de 2009, que en su Art. 75 (sobre reparaciones a las víctimas), establece que: “[...] La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”.



Foja: 1

En este mismo orden de ideas, expone que nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre las cuales vale destacar la resolución A/RES/60/147, de 24 de octubre de 2005, los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, que en su Principio II delimita el objeto de la obligación del Estado en materia de vulneración de derechos fundamentales al establecer: “[...] *La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de: a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones; b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional; c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y, d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante.*”

Indica, que a la luz de todo lo dicho hasta aquí, concluye que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible en virtud del Principio IV de dicho cuerpo legal según el cual: “[...] *Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional.*”

Por último, señala que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su 61° Periodo de Sesiones, aprobó el año 2005 el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Allí se lee -en el Principio 23



Foja: 1

sobre restricciones a la prescripción- que: *“La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación.”*

Resume, que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales sobre el jus in bello.

Afirma, que así lo han entendido los Tribunales Superiores nacionales y es en ese sentido que la más reciente jurisprudencia de la E. Corte Suprema le ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los derechos humanos declarando que: *“[...] conforme se ha señalado en el presente veredicto, en autos se está en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina delitos de “lesa humanidad”, calificación que no sólo trae aparejada la imposibilidad de amnistiar el ilícito, declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que además, la inviabilidad de proclamar la extinción - por el transcurso del tiempo - de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado.”* (Cfr. E. Corte Suprema 21.01.2009, “Episodio Tormen”, Rol N° 3907-2007, Considerando N° 30). Vemos pues, la concreción de los principios (informadores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos) de congruencia y progresividad así como la interpretación e integración de sus normas según el ya citado principio pro homine.

Finaliza citando una serie de Jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema, y la Corte Interamericana, sobre casos de Responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad en que se ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil.

Respecto al daño provocado y al monto de la indemnización, señala que en este caso, existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima, que como hermanos de Juan Domingo Arias Quezada, les ha tocado



Foja: 1

soportar. Afirma que dicha dolorosa situación configura un claro daño moral que -según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional- amerita ser reparado a través de una indemnización.

Expone que por daño moral, se entiende aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico.

A continuación, hace un análisis de la conceptualización de daño moral en la doctrina chilena y la jurisprudencia.

Añade, que respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado. Argumenta, que del sentido común fluye que los familiares, en este caso los hermanos, de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, han sufrido un daño que debe ser reparado, en todas sus dimensiones.

Comenta, que desde el momento en que ya se tiene por probado que una persona perdió su vida o vio lesionada su libertad individual y/o su seguridad personal, por obra de agentes del Estado, entonces carece de sentido preguntarse en sede judicial si acaso los más cercanos a la víctima habrán resultado ilesos en su fuero interno, sus afectos y emociones, luego de los delitos cometidos. Por eso es que, para un sector importante del foro judicial, basta que respecto de las víctimas se acredite la lesión de un bien jurídico personalísimo para que se infiera como consecuencia necesaria el daño sufrido, con ocasión del hecho ilícito cometido.

Cita al efecto, sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema -de fecha el 8 de Noviembre de 1944- que, en lo pertinente, declara que *“una de las razones que justifican en derecho la indemnización por el daño moral, es el efecto de la disminución de la capacidad de trabajo, la depresión de salud o de las energías, fenómenos naturales y ordinarios que, por ello, no necesitan ser especialmente probados, ya que la comprobación de su realidad va incluida en la existencia misma de la desgracia, que para el demandante -pariente cercano de la víctima- importa el delito o cuasidelito cometido en la persona de ésta”*, RDJ, Tomo XLII, sec. 1, página 392).



Foja: 1

Prosigue citando jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, y añade que idéntico criterio al de la dogmática y la práctica judicial chilenas, se halla a nivel de la jurisprudencia internacional.

Explica que en la actualidad ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. De hecho, en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos -tales como, las afectaciones a su derecho a la vida, o a la integridad personal o la libertad ambulatoria- no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido, toda vez que (dicho padecimiento) *“resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a tortura, agresiones y vejámenes (...) experimente dolores corporales y un profundo sufrimiento”* (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Moiwana”. Reparaciones. Sentencia de 15 de junio de 2002. Serie C N° 124. Párr.195; “Caso Gómez Palomino”. Reparaciones. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C N° 136. Párr. 132; “Caso Blanco Romero y otros”. Reparaciones. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C N° 138. Párr. 132; “Caso Masacre de Mapiripán”. Reparaciones. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C N° 134. Párrs. 283 y siguientes; “Caso Masacre Pueblo Bello”. Reparaciones. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C N° 140. Párr. 255; “Caso López Álvarez”. Reparaciones. Sentencia de 1o de febrero de 2006. Serie C N° 1141. Párr. 201, letra b; “Caso Baldeón García”. Reparaciones. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C N° 147. Párr. 130).

Expresa, que los órganos encargados de la administración de justicia requieren de parte de quienes ejercen acciones legales que estos sean capaces, entre otras cosas, de expresar con claridad sus pretensiones y precisar de forma concreta las medidas de reparación a las que aspiran. Por ello, solicita que se condene al Fisco de Chile a pagarle una suma total de \$960.000.000.

Previo invocación de disposiciones legales y jurisprudencia que estima pertinentes, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizado, por la suma total de \$960.000.000, correspondiéndole a cada uno de los demandantes, doña Catalina del Carmen Arias Quezada, doña Ángela Adelina Arias Quezada, doña Mercedes del Carmen Arias Quezada, doña Patricia de los Ángeles Arias Quezada, doña Elba del Carmen Arias Quezada, don José Eduardo



Foja: 1

Arias Quezada, don Ángel Raúl Arias Quezada y don Leonardo Antonio Arias Quezada, la suma de \$120.000.000, con ocasión de los crímenes cometidos respecto de su hermano, don Juan Domingo Arias Quezada, ilícitos cometidos por agentes del Estado de Chile y ya relatados en este libelo pretensor, o bien, en su defecto, a la suma que este tribunal considere en justicia, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

QUINTO: Que, en su contestación, la demandada, opone en primer lugar la improcedencia de la indemnización, por haber sido preteridos legalmente los demandantes, en calidad de hermanos de la víctima.

Explica que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. En efecto, sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria. Ello porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas. Ello es así, porque no es posible omitir el hecho que las arcas fiscales –que en definitiva están constituidas por los aportes de todos los chilenos– deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad -las que, por cierto, son imprescindibles- pero así también, lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los más directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos, acontecidos en nuestro país.

Así, no es extraño que muchas de las negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estimen más lejanos; se compensen algunos daños y se excluyan otros; o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Menciona, que en este escenario, la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de



Foja: 1

interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

Detalla, que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$ 247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$ 648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: la suma de \$ 41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$ 23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$ 1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$ 23.388.490.737.-

En consecuencia, detalla que a diciembre de 2019, el Fisco habría desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Afirma, que el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones es bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Sostiene, que para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral.

Afirma, que ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el pretium doloris, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.



Foja: 1

Refiere que en el Derecho Comparado, en el Common Law, se alude al concepto de “loss of consortium”; esto es, el derecho a la reparación por perder al cónyuge o hijo, reduciéndolo a personas determinadas. En el Derecho estadounidense se alude al concepto de “loss of society”, que se refiere a la noción de control, poder marital. Por su parte, en Inglaterra, se menciona el “dependant law”, en donde ocupan el primer y excluyente lugar el o la cónyuge y los hijos. También en Sudamérica, específicamente en Argentina, esta materia se encuentra resuelta en el artículo 1098 del Código Civil, según el cual, esta acción de satisfacción está limitada a los herederos forzosos.

Indica que en nuestro Derecho, se pueden traer a colación distintas normas, entre ellas, el artículo 43 de la Ley N°16.744, que prescribe que producida la muerte de un afiliado por accidente del trabajo o enfermedad profesional o si fallece el inválido pensionado, tendrán derecho de pensiones de supervivencia el cónyuge, hijos, madre de sus hijos naturales y los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar. Así también, las normas sucesorias de los artículos 988 y siguientes del Código Civil establecen una prelación, en que los asignatarios más directos -hijos y cónyuge- excluyen al resto.

Advierte que el respecto, es claro que siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso del demandante de autos, fue preterido por la ley como beneficiario de una asignación en dinero por el daño que invocan, sin que ello implique afirmar que no haya obtenido una reparación satisfactiva por otra vía, como se explicará más adelante.

En suma, la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los hermanos de los causantes.

En segundo lugar, afirma que sin perjuicio de lo anterior, los demandantes han obtenido reparación satisfactiva. Advierte, que el hecho que los demandantes no hayan tenido derecho a un pago en dinero, -por la preterición legal- no significa que no hayan obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de ésta.

Indica, que tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido.



Foja: 1

Comenta, que en efecto, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas por repercusión, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal, el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis, se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Precisa, que estos programas, incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N°19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.

Al respecto, hace presente, que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias, siendo éstas últimas reservadas sólo para la denominada familia nuclear, lo que hizo necesario considerar otra suerte de medidas para diversos afectados.

Señala, que ello se desprende del concepto, que el Ejecutivo, -siguiendo el referido Informe de la Comisión-, entendió por reparación, esto es: *“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”*. De esta forma, en la discusión de la Ley N° 19.123 en diversas oportunidades se hizo referencia a la reparación “moral” buscada por el proyecto.

Asegura, que puede indicarse que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniaria, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas



Foja: 1

víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Menciona, que la doctrina, en la materia, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Expresa, que en el caso de las personas como las de autos, las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica. Cita como ejemplo las siguientes:

a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;

b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día nacional del detenido desaparecido.

c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos.

d) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH, tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el "Memorial de los prisioneros de Pisagua" en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo "Para que nunca más" en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial "Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia" en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial "Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama" en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el "Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región de Atacama" en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el "Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos" en la Plaza de Armas de Curacaví; el "Memorial a las víctimas detenidas



Foja: 1

desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista” en la sede de este partido; el "Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca" en esa ciudad; y el "Memorial escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas" en el Cementerio Municipal de esa ciudad.

Todos ellos unidos, como consta del Informe adjunto del Ministerio del Interior, a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

Agrega, que los actores de autos son titulares por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).

Afirma, que el cúmulo de reparaciones indicadas han producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente.

Advierte, que diversas sentencias han insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente *“reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”*, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.

Menciona, que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de derechos humanos desarrollada por Chile, a tal punto, que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas a los familiares más directos.

Indica, que es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización, lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Comenta, que aun, entonces, de ser efectivo que los demandantes pudieron no percibir una reparación expresada mediante pagos en dinero, en tal caso, como extensamente se ha expuesto y también lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo del caso “Almonacid”, las políticas de reparación asumidas por el Estado por violación a los derechos humanos, entre las cuales



Foja: 1

están las reparaciones simbólicas ya referidas, los programas de beneficios educativos y el denominado Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), significan también reparación a los familiares de víctimas de derechos humanos.

Sostiene, que estando entonces la acción de autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, opone formalmente la excepción de reparación satisfactiva a la acción deducida por los demandantes ya individualizados, por haber sido ya indemnizados por el secuestro y homicidio de su hermano don Juan Domingo Arias Quezada, mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS, como se ha señalado precedentemente.

En subsidio, opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita ésta, se rechace la demanda en todas sus partes.

Menciona, que según lo expuesto en la demanda, la muerte de don Juan Domingo Arias Quezada ocurrió el 27 de septiembre de 1973.

Explica, que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de la propia víctima de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aún, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de la notificación de la demanda de auto, esto es, el día 28 de enero de 2021, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización



Foja: 1

y la fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Hace referencia a generalidades sobre la prescripción, indicando que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. *“Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”*. Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Expresa, que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”*.

Menciona, que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Señala, que efectivamente, las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Indica, que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso primero del Código Civil).



Foja: 1

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido.

Señala que fundamento de la prescripción, es dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Expone que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Añade, que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, asegura que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

Advierte, que el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

A continuación y haciendo referencia a la jurisprudencia sobre la materia, cita la sentencia del pleno de la Excelentísima Corte Suprema de 21 de enero de 2013 (Rol 10.665-2011), sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de



Foja: 1

indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

En dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1°) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

2°) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

3°) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

4°) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia;

5°) Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde este momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la persona desaparecida.

Añade que existen numerosos fallos dictados por la Excma. Corte Suprema en los cuales se ha reconocido expresamente el carácter prescriptible de las acciones indemnizatorias por hechos análogos al de autos.



Foja: 1

En cuanto al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, indica que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de la misma, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Argumenta, que sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de la misma.

Finalmente y respecto a normas contenidas en el Derecho Internacional en cuanto que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, señala que su parte se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aunque no todos ellos aparecen citados en la demanda, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Explica que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2391 de 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero señala -tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.



Foja: 1

Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

La Resolución N° 3074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

Añade que en relación a esta Convención, debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile. Es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Insiste que el planteamiento de la defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país. Advierte, que la Excelentísima Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación interpuesto en los autos Ingreso N° 1133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de



Foja: 1

2007, que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas.

Agrega, que lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos ingreso N°4067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007, pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sres. Ricardo Gálvez, Adalis Oyarzún, el fiscal subrogante Sr. Carlos Meneses y los abogados integrantes Sres. Fernando Castro y Oscar Herrera.

En el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema.

Concluye señalando, que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Es por ello, que indica que con el mérito de lo expuesto precedentemente, el Tribunal deberá rechazar la demanda por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

En cuanto al daño e indemnización reclamada y en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, la defensa fiscal opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y el excesivo monto pretendido.

Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.



Foja: 1

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Tratándose del daño puramente moral, por afectar a bienes extrapatrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece, a pesar de la indemnización.

Precisa, que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Menciona, que ha dicho la Excma. Corte Suprema: *"Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido"*.

Expone, que es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización, que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Argumenta, que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del tercero civilmente responsable en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, asegura que la cifra pretendida



Foja: 1

en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.

Además de lo alegado, añade que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Afirma, que a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Expresa, que lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Sostiene que respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Prevía invocación de disposiciones legales que estima pertinentes, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, acoger las alegaciones, excepciones y defensas opuestas, y rechazarla en todas sus partes, o en subsidio, fijar el monto de indemnización que pudiere corresponder, teniendo presente todo lo expuesto y los beneficios patrimoniales y extra patrimoniales ya percibidos a través de las leyes de reparación.

SEXTO: Que, evacuando la réplica, respecto a la alegación de preterición legal, el demandante señala que la estima absolutamente errada. Explica que, en el mejor de los casos, los montos que otorga la referida Ley, sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Dichas pensiones, y reparaciones simbólicas (las que no gozan sus representados), en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por los familiares de don Juan Domingo Arias Quezada, menos



Foja: 1

aún el experimentado por sus hermanos, y es por tal motivo que se ha interpuesto la presente demanda. Con todo, indica que nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que deben obtener los familiares, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible. Conforme con ello sostiene que es evidente que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada.

Afirma que el Fisco reconoce por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a los demandantes. Detalla, que por lo demás, “los pagos” que realiza el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que además alega. Más aún reconoce el deber de indemnizar, cuestión que debiera hacer en todo caso con el demandante.

Señala, que en directa relación a lo anterior, la Ley 19.123, que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2 establece que *“Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”*. La palabra promover no es sinónimo de reparar, y en el caso de su mandante, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padece por la desaparición de su familiar. Detalla, que el sentimiento de injusticia y de no haber sido reparado en modo alguno subsiste hasta el día de hoy.

Advierte, que la propia Ley 19.123 no considera incompatibles las reparaciones económicas, y menos entonces, las reparaciones simbólicas o satisfactivas, con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24 que establece *“La pensión de reparación puede ser compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*. Entonces, con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber existido reparaciones simbólicas y beneficios de salud para los dolientes que se encuentran en la misma situación de los demandantes. En otras palabras, al no establecer la ley en comento incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión o cualquier otro tipo de reparación, y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, de suyo insostenible resulta la excepción invocada por el Fisco.

Indica, que así también lo han entendido los tribunales superiores de Justicia en forma reiterada. No cabe entonces que el demandado con una interpretación



Foja: 1

bastante particular y cuestionable desde el punto de vista jurídico, trate de decir que en base a la ley precitada, los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos estarían impedidos de demandar. Comprueba lo anterior lo sentenciado en otros casos, como los más de 180 casos citados en la demanda de autos y, entre ellos, casos emblemáticos como el de los familiares de Carmelo Soria, los familiares de Tucapel Jiménez, familiares del ex Canciller Orlando Letelier, el caso de doña Otilia Vargas (madre de 5 detenidos desaparecidos), o el caso de la familia del General Carlos Prats, todos indemnizados con cuantiosas sumas, pese a ser también beneficiarios de las pensiones y beneficios establecidas por leyes de reparación. Estos casos vienen a confirmar que es perfectamente compatible una indemnización en conjunto con la reparación establecida por dichas leyes. Si así no lo entendiéramos, el Consejo de Defensa del Estado estaría haciendo discriminaciones que no se condicen con lo expresado en nuestra Constitución o al menos se estaría contradiciendo en sus aseveraciones.

Expresa, que del mismo modo lo ha entendido también la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en forma reiterada: *“Finalmente la alegación de no proceder la indemnización reclamada por haberse otorgado la establecida en la Ley N° 19.123 debe ser rechazada, por cuanto es palmario que la dispuesta en tal cuerpo legal no obstante sus motivaciones y texto, es puramente asistencial, destinada sólo a establecer condiciones de sobrevivencia y no indemnizatorias”* (CFR. Corte de Apelaciones, Caso Montes con Fisco de Chile, 10-07-2007, Considerando 7°). En el mismo sentido se falla en el caso Carrasco con Fisco (Corte de Apelaciones de Santiago, caso Carrasco con Fisco de Chile, 10-07-2007, Rol 6715-2002, Considerando 8°).

En el mismo orden de ideas, la norma establecida en el artículo 76 de La Constitución Política de La República prescribe: *“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”*, ilustra que el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la propia Carta Fundamental, ya que basarse en la ley 19.123 para decir que el daño moral ya está reparado o preterido, llevaría necesariamente a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello es abiertamente inconstitucional.



Foja: 1

Finalmente, argumenta que si se aceptara la tesis Fiscal, en el caso del monto de la reparación, meramente simbólica en este caso, por cierto, que han recibido los demandantes, estaría fijada de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, es decir por el Estado de Chile, y le estaría vedado a las víctimas discutirlo. Asegura, que un razonamiento así es contrario a cualquier principio básico del Derecho.

En segundo lugar y respecto a las fuentes del derecho aplicable, advierte que es jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil.

Señala, que tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que, por lo demás, ya han sido aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos, por cierto, a la Excelentísima Corte Suprema.

Explica que en el caso "Caro con Fisco de Chile", la Corte Suprema da buena cuenta de ello: *"Que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad del Estado, si bien se encuentra consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, no indica cual es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4° del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Esta disposición previene, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado"* (Cfr. EXCELENTÍSIMA CORTE SUPREMA, 19.10.05, "Caro Silva con Fisco de Chile", Rol N° 4004-2003, considerando N° 6).

Hace presente, que la argumentación invocada por la defensa fiscal resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la "inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado" basado en que "el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil en el Título XXXV, denominado De los Delitos y Cuasidelitos, artículos 2314 y siguientes". Comenta, que esta última alegación, resulta incompatible y contraria a la línea de defensa que



Foja: 1

históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado, sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla. Igualmente, dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo ha requerido de esos mismos tribunales y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone, como es el caso sublite.

En este orden de ideas, la doctrina de los actos propios consiste simplemente en castigar como *“inadmisibile toda pretensión contradictoria con comportamientos observados anteriormente por el mismo sujeto que hace valer dicha pretensión”* (Cfr. Pardo De Carvallo, Inés. La doctrina de los Actos Propios. Revista de Derechos de la U. Católica de Valparaíso XIV, 1991-1992. P. 67). En tal sentido ha fallado uniformemente nuestra Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades. Así ha sentenciado: *“Que al actuar de la forma que lo hicieron los ejecutados (...), es hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, importando un perjuicio en contra del acreedor, lo que no resulta aceptable, de acuerdo al principio acogido por este tribunal, por la doctrina, y que inspira además disposiciones como es la del artículo 1683 del Código Civil y otras de nuestra legislación, principio que recibe el nombre de teoría del acto propio. Se expresa en la forma latina venire cum factum non valet, lo que implica que no es lícito hacer valer un derecho o una pretensión en contradicción con la anterior conducta de la misma persona, y siempre que este cambio de conducta o comportamiento importe un perjuicio en contra de otro o sea contrario a la ley, las buenas costumbres o la buena fe”* (Cfr. Corte Suprema. 20.04.2004. ROL N° 3097-2003. Considerando N° 4.)

Menciona que aun así, el demandado en su contestación de la demanda, insiste que el caso de autos estaría prescrito. Tal hecho no es así por varias razones:

-La acción constitucional, para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del estado no establece plazo de prescripción. (Artículo 38° inciso 2° de la Constitución Política de la República).

-El demandado no reconoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues insiste en sostener una interpretación antojadiza y/o



Foja: 1

reduccionista no solo de las leyes que componen el ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional de los Derechos Humanos, como se verá más adelante.

Afirma que de acuerdo a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” es un error ignorar el hecho, que ésta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes. Al respecto, basta tener a la vista el Art. 63 de la citada Convención junto con la enorme cantidad de jurisprudencia que, desde hace varios años, viene dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo. En nuestro medio, añade, ya existen precedentes jurisprudenciales que refuerzan esta misma idea. De hecho, la Corte de Apelaciones de Santiago ha sentenciado *que “cabe precisar que la fuente de la responsabilidad civil, tratándose de una violación a los derechos humanos, está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos. En efecto, de acuerdo a los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando ha habido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. A juicio de la Corte Interamericana, el artículo 63.1 de la Convención constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo han reconocido esta Corte (...) y la jurisprudencia de otros tribunales (...)” (Caso Aloeboetoe y otros de 1993). En un fallo reciente, aplicando este criterio señala: “Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de La Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación” (Caso Trujillo Oroza, de 2002. En el mismo sentido: caso Cantoral Benavides, de 2001; caso Cesti Hurtado, de 2001; caso Villagrán Morales y otros, de 2001; caso Bámaca Velásquez, de 2002).*

Reitera que sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo, toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas. Al respecto, la ltima. Corte de Apelaciones ha sentenciado recientemente en relación a la imprescriptibilidad de la acción civil en delitos de lesa humanidad cometidos por el



Foja: 1

Estado que: *“la imprescriptibilidad señalada rige tanto para el ámbito de lo penal como de lo civil, puesto que carece de sentido, frente a la antedicha afirmación basada en el ius cogens, sostener la imprescriptibilidad para el primer ámbito y desestimarla para el segundo, aduciendo para ello que éste es patrimonial, así como también el derecho a la indemnización reclamada, y por lo mismo privada y renunciable”. Y luego, continúa señalando “Que la prescripción de la acción de que se trata no puede ser determinada a partir de las normas del derecho privado, que se refieren efectivamente a cuestiones patrimoniales, pues esas normas atienden a finalidades diferentes a aquellas que emanan del derecho internacional de los derechos humanos y del ius cogens, que importan obligaciones de respeto, de garantía y de promoción de esos derechos, así como la adopción de medidas para hacerlos efectivos”. (Cfr. Corte de Apelaciones de Santiago, 11.05.07, Caso “Reyes Gallardo con Fisco de Chile”, Rol N° 3505-2002. Considerandos N° 2 y N° 3).*

Con todo, *“Tratándose de una violación de los derechos humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos, y ello ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación que no lo considera por responder a criterios claramente ligados al interés privado, y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX”* (Cfr. Corte De Apelaciones de Santiago, Caso “Carrasco con Fisco de Chile”, 10.07.2007 , Rol 6715-2002).

Señala, que la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento. Añade, que en tal sentido, el profesor Carlos Ducci enseña que la interpretación estricta y/o restrictiva, que se funda en motivos lógicos o en el respeto a los derechos individuales, se aplica en primer término a las leyes penales, debiendo hacerse presente que la jurisprudencia ha dado el carácter de pena a las sanciones en general, más allá del campo estrictamente penal (Ducci, Carlos. Derecho Civil. Parte General. Editorial Jurídica de Chile. 4a Ed. 2005. p. 94). La evidente naturaleza sancionatoria del instituto de la prescripción extintiva impide que esta sea aplicada por analogía, con mayor razón cuando su aplicación analógica se contrapone a los principios que informan tanto el Derecho Público en general y el Administrativo en particular, así como - y muy especialmente - los que subyacen en el Derecho Internacional de los Derechos



Foja: 1

humanos. En efecto, pretender integrar la ausencia de normativa que regule la prescripción extintiva en el caso sub lite mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, en tanto niega la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, así como la particularidad de las relaciones jurídicas que cada uno de tales estatutos regula: El Derecho Privado regula las relaciones desde un plano de igualdad con plena autonomía de las personas para obligarse y cuyo fin es el bien particular en tanto su objeto es el intercambio de bienes. El Código Civil es supletorio al Derecho Privado, al que orienta. El Derecho Público, en cambio, regula la relación de los particulares frente al Estado cuyo fin es el bien común basado en los principios de juridicidad y supremacía constitucional. Más aún, luego del advenimiento de la 2a guerra mundial y la experiencia aciaga que significó el régimen nazi, surge fuertemente la necesidad de limitar el poder y arbitrariedad del Estado, modificando radicalmente la concepción de la soberanía estatal, limitando su ejercicio al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana dando vida al complejo normativo de los Derechos Humanos. De este modo, la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código Civil reconoce en su artículo 4° al estipular que las disposiciones particulares “se aplicaran con preferencia a las de este Código”.

En consecuencia, la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular: mientras el Código Civil regula relaciones de tipo contractual vinculada a un negocio común o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí nos encontramos frente a delitos de la mayor gravedad que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto. Así, al no existir una similitud en las situaciones fácticas no resulta viable la analogía que supone hechos de igual valor que implique iguales consecuencias jurídicas.

Respecto al derecho aplicable, señala que cualquier estatuto que se aplique llevará a la misma conclusión: la existencia de la responsabilidad del estado, por



Foja: 1

hechos que causan daño y en que los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar tales daños.

Sostiene, que en un Estado de Derecho real - y no aparente - el principio de la responsabilidad es de la esencia del mismo. Los daños causados por el Estado literalmente “se pagan”.

Añade, que el derecho citado por las partes no es vinculante para el juriscente. Este será el que soberanamente aplique el derecho al caso concreto. Ese derecho que se construye desde las normas constitucionales que conforman las bases de la institucionalidad hasta las legales. No olvidando las internacionales vinculantes para el Estado de Chile a propósito del inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política.

Respecto a la Jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, señala que respecto a la afirmación que realiza el demandado en relación a que la Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, si bien ello es cierto, la más reciente jurisprudencia de la Excelentísima Corte ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de Lesa Humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos concediendo así la correspondiente indemnización.

Por último, en relación al monto de lo demandado comenta que han señalado un monto específico pues una demanda indemnizatoria nos exige pretensiones concretas. Indica, que no hay dinero que supla el dolor experimentado por los demandantes. Hace presente, que en lo petitorio lo expresa que se condene a *“la suma que Su Señoría disponga”*.

En cuanto a los reajustes, reiteran lo expuesto en el libelo. Expresa, que una correcta aplicación del artículo 1557 en relación al artículo 1551 del Código Civil, normas aplicables supletoriamente al estatuto de responsabilidad extracontractual del Estado, determinaría que los reajustes e intereses aplican desde la fecha de interposición de la demanda.

SÉPTIMO: Que, evacuando la duplica, señala que tanto la excepción de preterición legal y reparación satisfactiva, tienen su origen en los ingentes esfuerzos que ha realizado el Estado de Chile, desde el término de la dictadura militar, para reparar los daños sufridos por las víctimas de violaciones a los derechos humanos y por sus familiares.



Foja: 1

Señala que en dicho contexto, la ley 19.123 y otras posteriores encaminadas al mismo fin, han buscado resarcir de un modo general y equitativo, los daños provocados durante la dictadura militar. Teniendo en cuenta los limitados recursos de las arcas fiscales, se buscó establecer una reparación pecuniaria directa, mediante la entrega de bonos o pensiones en dinero a los familiares más cercanos, a saber, padres, hijos y cónyuge de víctimas de violaciones a los derechos humanos. En el mismo contexto, se excluyó a los hermanos y a otros parientes más lejanos, de dichas reparaciones pecuniarias, por preterición legal, sin embargo, se les incluyó dentro de los beneficios otorgados mediante prestaciones estatales y dentro del conjunto de reparaciones simbólicas, que miradas en su conjunto y bajo el contexto descrito al contestar la demanda, se puede concluir que el Estado de Chile ha reparado el daño provocado.

En consecuencia, en atención al cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, es que se opusieron las excepciones de reparación satisfactiva a la acción deducida por los demandantes de autos, mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS, como se ha señalado precedentemente.

Añade que en relación a la excepción de prescripción opuesta, siendo una acción exclusivamente pecuniaria, que persigue una suma de dinero y ningún otro aspecto en lo integral, no hay en la réplica fundamento alguno que justifique la imprescriptibilidad, dado que no hay tratado, convención o declaración del derecho humanitario que establezca e imponga una acción indemnizatoria ilimitada en el tiempo. Agrega, que siempre ha quedado claro que en materia de prescripción se hace una distinción nítida que surge de los objetivos sociales perseguidos, diferenciando el aspecto penal del civil. Cada uno de dichos aspectos tiene una regulación diferente, como se explicó al contestar la demanda. La analogía o la coherencia que se exponen en algunos fallos no tienen la suficiente claridad y sustento para entender que las responsabilidades penales y civiles, en caso de delitos de lesa humanidad, constituyen una unidad indisoluble. En lo que hay claridad y cierta uniformidad doctrinaria y jurisprudencial está referido a la imprescriptibilidad de las acciones penales para perseguir tales ilícitos, lo que se ve refrendado por la existencia de tratados que así, en forma expresa, lo establecen. Sin embargo, ello no ocurre en la parte civil derivada de los mismos.

En cuanto al monto demandado, destaca que su parte estima que es excesivo, consideración que no cambia debido a los montos fijados en otras causas, respecto de las cuales también se sostuvo que eran desproporcionados.



Foja: 1

Finalmente, en cuanto a la fecha desde la cual se deben calcular los reajustes e intereses reitera lo señalado al contestar la demanda. Afirma, que la única fecha posible a partir de la cual deben ser calculados los reajustes es desde el día en que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, pues sólo en ese momento habrá quedado establecida la obligación pecuniaria en forma definitiva. Y los intereses deben calcularse desde que el fallo quede a firme y a partir de la mora del deudor en el cumplimiento de la obligación.

OCTAVO: Que para acreditar sus dichos, la demandante acompañó en autos:

Prueba Documental:

Al folio 1:

1. Certificado suscrito por la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doña Lorena Recabarren Silva.
2. Certificado de nacimiento de Juan Domingo Arias Quezada.
3. Certificado de defunción de Juan Domingo Arias Quezada.
4. Certificado de nacimiento de Catalina del Carmen Arias Quezada.
5. Certificado de nacimiento de Ángela Adelina Arias Quezada.
6. Certificado de nacimiento de Mercedes del Carmen Arias Quezada
7. Certificado de nacimiento de Patricia de los Ángeles Arias Quezada.
8. Certificado de nacimiento de Elba del Carmen Arias Quezada.
9. Certificado de nacimiento de José Eduardo Arias Quezada.
10. Certificado de nacimiento de Ángel Raúl Arias Quezada.
11. Certificado de nacimiento de Leonardo Antonio Arias Quezada
12. Copia del Mandato Judicial Amplio de fecha 19 de agosto de 2020, otorgado ante Notario Público Suplente de la Séptima Notaría de Santiago, don Christian Alejandro Ortiz Cáceres, Repertorio N° 7.105/2020.
13. Copia del Mandato Judicial Amplio de fecha 18 de febrero de 2020, otorgado ante Notario Público Suplente de la Séptima Notaría de Santiago, don Christian Alejandro Ortiz Cáceres, Repertorio N° 2.177/2020.



Foja: 1

14. Copia del Mandato Judicial Amplio de fecha 18 de marzo de 2020, otorgado ante Notario Público Titular de Osorno, don José Robinson Dolmestch Urra, Repertorio N° 1.260/2020.

15. Copia de Mandato Judicial Amplio de fecha 12 de septiembre de 2016, otorgado ante el Cónsul General de Chile en México, don José Jaliliye Lana, debidamente legalizado y protocolizado ante la Notario Público Titular de la Séptima Notaría de Santiago, doña María Soledad Santos Muñoz, con fecha 22 de septiembre de 2016, Repertorio N° 13.506/2016.

Al folio 33:

1. Informe psicológico de evaluación de daño emitido por el psicólogo Juan Manuel Gálvez Villarreal del Programa PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Norte, respecto de la paciente doña Catalina del Carmen Arias Quezada.

2. Informe psicológico emitido por la psicóloga Natalia Hidalgo Leiva del Programa PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, con fecha 12 de agosto de 2020, respecto de la paciente doña Ángela Adelina Arias Quezada.

3. Informe psicológico con énfasis en evaluación de daño emitido por el psicólogo Juan Manuel Gálvez Villarreal del Programa PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Norte, respecto de la paciente doña Mercedes del Carmen Arias Quezada.

4. Informe psicológico evaluación de daño asociado a violencia política, emitido por el psicólogo Miguel Ángel Varas Mendoza del Programa PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Sur, con fecha 27 de julio de 2020, respecto de la paciente doña Patricia de los Ángeles Arias Quezada.

5. Informe Avance de Proceso, emitido por la psicóloga Carolina Torres González del Centro Bienestar y Familiar Alianza de la comuna de San Bernardo, con fecha de abril de 2020, respecto de la paciente doña Elba del Carmen Arias Quezada.

6. Informe de daño, emitido por el médica de familia Dr. Carlos Morales Negrón, la psicóloga Daniela Barrientos Gómez y la trabajadora social Ana María Díaz D., del Programa PRAIS del Servicio de Salud de Osorno, de fecha 22 de septiembre de 2020, respecto del paciente don José Arias Quezada.

7. Informe psicológico de evaluación de daños, emitido por el psicólogo Juan Manuel Gálvez Villarreal, del Programa PRAIS del Servicio Metropolitano de Salud Norte, respecto del paciente don Ángel Arias Quezada.



Foja: 1

8. Informe psicológico de evaluación de daños, emitido por el psicólogo Juan Manuel Gálvez Villarreal, del Programa PRAIS del Servicio Metropolitano de Salud Norte, de fecha 30 de julio de 2020, respecto del paciente don Leonardo Antonio Arias Quezada.

9. Copia de la Norma Técnica N° 88 *“Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el periodo 1973 – 1990”*.

10. Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada con fecha 29 de noviembre de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Chile”.

11. Contestación del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, de fecha febrero de 2018.

12. Sentencias de casación y de reemplazo dictadas con fecha 9 de diciembre de 2019, por la Excma Corte Suprema, en el ingreso Rol 16950-2019.

13. Sentencias de casación y de reemplazo dictadas con fecha 6 de diciembre de 2019, por la Excma Corte Suprema, en el ingreso Rol 18179-2019.

14. Sentencias de casación y de reemplazo dictadas con fecha 24 de diciembre de 2021, por la Excma Corte Suprema, en el ingreso Rol 13877-2019.

Al folio 36:

1.- Respuesta del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) al oficio diligenciado ante dicha institución.

Además, solicitó oficios, los que fueron acompañados a los folios 35, 37 y 39.

Prueba Testimonial.

A folio 51, rindió prueba de tres testigos:

En primer lugar comparece doña Benedicta Cecilia Serna Gutiérrez.

Relata, que en esta causa demanda la familia Arias. Expresa, que conoce la historia de Juan que es el hijo de esta familia, el que falleció a causa de torturas de agentes del estado.

Expresa, que es vecina de ese sector, por lo que fue testigo del sufrimiento de la familia, de todo lo que la familia pasó después de que encontraron a Juan.



Foja: 1

Menciona, que a la madre le cambio la vida por años, y que el padre murió sufriendo y buscando justicia.

Agrega, que a las hermanas les cambió completamente la vida, se fueron incluso del lugar donde vivían.

Añade, que un hermano estuvo preso, y salió del barrio, otro hermano se fue fuera del país exiliado. Las hermanas mayores no iban mucho, porque había un cierto resentimiento al sector, las hermanas menores, fueron las últimas que se quedaron en el sector y finalmente se fueron de ahí, por el dolor que significaba seguir con los recuerdos.

Menciona, que en noviembre del año 1973 o a partir de septiembre de ese año, y de ahí en adelante son por lo menos entre dos y cinco años en que el sector fue objeto de allanamientos y vigilancia.

Comenta, que la situación angustiante de la familia sigue hasta hoy día. Se refiere al trauma de la muerte de Juan y respecto a la situación de inestabilidad que existió, hasta el año 1990.

Indica, que las torturas son de un agente del Estado y por tanto a quién hay que recurrir es al Estado de Chile en la demanda.

En segundo lugar, comparece don Luis Octavio Aravena Mardones,

Expone, que la causa se debe al enorme perjuicio que le significó a la familia y en especial a los hermanos de Juan Arias Quezada.

Relata, que a Juan lo tomaron detenido (supone) las Fuerzas de seguridad, lo torturaron y lo mataron, junto a otros amigos del testigo, Juan Carlos Merino, Mario Zamorano y otras dos personas.

Expresa, que lo que ha logrado saber, dice relación con la forma en que murieron en manos de terceras personas y la justicia de Chile no ha logrado determinar quiénes fueron.

Expone, que a “Juanito” lo mataron en horas altas de la noche y en aquella época en que murieron, solamente andaban en la noche policías y fuerzas armadas.

Afirma, que para sus familiares fue desastroso, era una familia tranquila, respetada en el sector de la población donde vivían. Señala, que era muy amigo de sus hermanos. Agrega, que vivieron además y han vivido toda la vida sin saber quiénes fueron los culpables de ese asesinato.



Foja: 1

Señala, que conoce el caso de los hermanos, su hermano mayor Ángel estuvo preso, y sabe por los amigos en común que estuvo muy mal.

Menciona, que tuvo siempre contacto con su segundo hermano, de nombre Leonardo, poco mayor que Juan y con él se comunicaban por carta y por teléfono. Expresa, que el salió al exilio también.

Menciona, que tuvieron que hacerse gastos del SML, del funeral, los traslados, ver el tema económico del cementerio. Agrega que el padre, don Angel, era jubilado y por razones de amistad con otros amigos conocía a su padre desde otro punto de vista y conocía esa esfera y sabía cómo económicamente quedó mal esa familia.

Expresa, que él salió al exilio meses después del golpe, por lo que no pudo haber visto esto en forma directa. Afirma, que se enteró de la muerte de Juan por teléfono.

Por último, comparece don Luis Antonio Nuñez Calvin, quien expone que es la familia Arias quien demanda. Expresa, que desconoce la naturaleza, la existencia y el monto de los perjuicios reclamados por la familia.

Precisa, que la familia Arias demanda en esta causa por el fallecimiento de su hermano Juan Arias y los daños morales provocados por todo esto.

Relata, que esto comienza desde septiembre cuando su hermano mayor Angel fue detenido y estuvo preso, luego viene la muerte de Juan Domingo y luego el exilio de Leonardo Antonio.

Sostiene, que en un momento ninguno de los tres hermanos mayores estaba. Señala, que fue testigo de que la mamá de los demandantes en más de alguna oportunidad fue a conversar con la madre del testigo, y se contaban sus penas con lágrimas.

Asegura, que permanecer en el lugar, le provocaba daño, por la razón de tener un hijo muerto, otro exiliado y porque nunca pudieron superar la muerte de Juan Domingo.

Indica, que el padre de Juan, era una persona muy afectiva. Señala, que cada vez que lo veía o lo saludaba, lo trataba con mucho cariño y siempre sacaba el recuerdo de su hijo y decía *“que pena que no está, quizá todos estarían mejor jugando como antes”*. Sostiene, que siempre fue la misma tónica del recuerdo constante de su hijo.



Foja: 1

Comenta, que el estado fue el causante del daño que se provocó en ese grupo familiar.

NOVENO: Que, la parte demandada no aporó en autos probanza alguna para acreditar sus alegaciones.

DÉCIMO: Que, el caso de autos, versa sobre la responsabilidad indemnizatoria que le cabría al Estado de Chile por las detención y asesinato del hermano de los demandantes, don Juan Domingo Arias Quezada, quien fue asesinado el 26 de noviembre de 1973, cuando solo tenía 17 años.

UNDÉCIMO: Que, del documento individualizado como *“Certificado suscrito por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doña Lorena Recabarren Silva”*; se tuvo por acreditado en el proceso, que don Juan Domingo Arias Quezada, fue declarado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como víctima de violaciones a los derechos humanos, quien murió el 26 de noviembre de 1973.

Además, caber señalar que la parte demandada no ha controvertido estas circunstancias, sino que ha centrado la controversia la preterición legal de los demandantes, y en si la acción indemnizatoria deducida por la actora se encuentra prescrita extintivamente a la fecha de haber sido notificada al demandado.

DUODÉCIMO: Que, de los párrafos reseñados en el considerando anterior, podemos concluir que estos hechos fueron cometidos por agentes del Estado, específicamente por órganos de seguridad del Estado de Chile, tal como da cuenta el informe señalado.

Asimismo, se tendrá presente que este punto, la responsabilidad del Estado, no ha sido discutida por las partes de este juicio, es más, la demandada alega expresamente que los demandantes, han sido reparados satisfactoriamente por el Estado por los delitos cometidos en contra del hermano durante la época de la dictadura.

En consecuencia, se tendrá por acreditado que el secuestro y asesinato de don Juan Domingo Arias, ocurrió en un contexto de violencia propia de aquella época, la que era practicada por agentes del Estado o civiles que actuaban por órdenes o bajo el amparo del régimen imperante, mediante prácticas graves y sistemáticas de violaciones a los derechos humanos con el único objetivo de exterminar y amedrentar -ya sea física y/o psicológicamente- a personas opositoras al régimen militar, como en el caso de marras.



Foja: 1

Así lo expuesto, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto a que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, y en su inciso final, al señalar que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por la demandada.

DÉCIMO TERCERO: Que, en primer lugar y respecto a la excepción de preterición legal del demandante, indicando fundamentalmente que la indemnización no puede alcanzar a los demandantes, en calidad de hermanos de la víctima, resultan inconsistentes los fundamentos de esa parte, toda vez que no existe norma alguna que excluya a los hermanos, del derecho a obtener algún tipo de indemnización en sede judicial.

No es efectivo que nuestra legislación establezca un orden de prelación genérica para todas las instituciones jurídicas existentes. Por el contrario, cuando nuestro legislador ha querido establecer una prelación lo ha hecho expresamente, como por ejemplo en materia penal, o en materia de derecho sucesorio, o en la Ley N° 16.744. Todo lo anterior, no ocurre en el caso de la indemnización de perjuicios por daño moral, menos aún en aquellas causas que se sustentan en crímenes de lesa humanidad.

A mayor abundamiento, la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores tampoco ha hecho tal distinción, es así que un fallo la Corte de Apelaciones de Santiago, en esta misma materia, confirmó la indemnización de perjuicios, por el secuestro calificado de la hermana de los actores de aquella causa, cometidos por agentes del Estado (Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, Rol. Criminal N°: 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014, considerando Décimo Sexto). En este mismo sentido, el fallo de la Corte Suprema que revocó la



Foja: 1

sentencia de segunda instancia, restableciendo la indemnización de perjuicios a favor de la querellante, quien era pariente por consanguinidad en cuarto grado en la línea colateral, es decir “primo” (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, conocido como “Nilda Peña Solari”, parte resolutive).

Cabe citar también, un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, aún más reciente, de fecha 19 de octubre de 2016, dictada por la Duodécima Sala, que en lo pertinente señala:

“CUARTO: Que, lo anterior significa que el daño moral ocasionado al hermano de la víctima no admite una negativa de entrada en virtud de eventuales omisiones que el legislador habría efectuado y que le afectarían, atendida una cierta lejanía que llevaría implícita la opción ejercida por éste en las leyes antes citadas. Se trata del daño moral causado por la muerte violenta generada por agentes del Estado en una persona con la cual existía un vínculo fraterno, esto es, con quien lo ligaba un parentesco de sangre por ser hijos de los mismos padres y con quien normalmente se creció, esto es, que fue gravitante en la propia formación de la personalidad del hermano sobreviviente.

Así las cosas, acreditado el vínculo, no se puede soslayar lo que aquello significa en términos de lo que ocurre con frecuencia y de allí surge la presunción que es posible construir a partir de dicho dato, con los caracteres de gravedad, precisión y concordancia que corresponde al proceso intelectual de valoración de la prueba, en términos tales que del certificado de nacimiento respectivo es posible acreditar el hecho base, del que es posible inferir la conclusión de que la forzada y violenta muerte de un hermano provoca un natural dolor, menoscabo, afectación, alteración de las condiciones normales de vida de quien tenía un vínculo fraterno que lo ligaba con la víctima. Y que no existe prueba que permita establecer que ocurrió algún suceso que hizo que los dos hermanos se hubiesen distanciado o hubiesen generado algún sentimiento de odiosidad, que tornara en irracional la conclusión que aquí se ha establecido.”

Esta sentencia, cita un fallo de la Corte Suprema que resulta del todo pertinente citar también, a saber causa Rol N° 6686-2016 de fecha 21 de julio del corriente, la que en lo pertinente señala:

“SEXTO: Que, de acuerdo a lo expuesto procede acoger el recurso en cuanto ataca la preterición legal de los actores –hermanos y tía de la víctima, adoptada sobre la base de una supuesta decisión del legislador que habría privilegiado el



Foja: 1

resarcimiento los familiares más próximos al afectado, ya que cada vez que se ha optado por establecer un orden legal respecto de beneficios o posibilidades de accionar existen disposiciones expresas que así lo resuelven, lo que en la especie no sucede, pues la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta con alegar su concurrencia y la relación con la víctima para plantear la pretensión, lo que en este caso está satisfecho”.

DÉCIMO CUARTO: Que, los certificados de nacimiento acompañados al anexo de folio1, permiten acreditar que los demandantes detentan la calidad de hermanos de la víctima don Juan Domingo Arias Quezada.

Cabe destacar, que dichos documentos, son instrumentos públicos, y en conformidad a lo dispuesto por el artículo 1706 del Código Civil, hacen fe entre las partes aun en lo meramente enunciativo, con tal que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato.

En atención a lo expuesto precedentemente y tal como se declarará en la parte resolutive de este fallo, se rechazará la alegación hecha por la demandada en cuanto a declarar la preterición legal de los demandantes en sus calidades de hermanos de don Juan Domingo Arias Quezada.

DÉCIMO QUINTO: Que, la parte demandada opuso también la excepción de existencia de reparación satisfactiva obtenida por el actor. Al respecto cabe tener presente que la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios, a través de los cuales el Estado chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo 4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.



Foja: 1

Asimismo, la citada ley en parte alguna estableció una incompatibilidad entre los beneficios que otorga e indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, no existiendo motivo alguno ni siendo facultad de esta sentenciadora para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos. Cabe señalar además, que la demandada no acreditó en estos autos si los demandantes reciben alguno de los beneficios a que hace referencia.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y N° 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral.

Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema en diversos fallos, indicando incluso que las fuentes que dan origen a la indemnización por daño moral y los beneficios establecidos por la Ley N° 19.123 provienen de fuentes distintas. Es así, que la indemnización encuentra su fuente en el derecho internacional por la demanda que se hace al Estado en la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos así como la interpretación de las disposiciones de derecho internacional que conforman el ius cogens que tiene plena aplicación en virtud del artículo 5° de la Constitución Política del Estado, a diferencia de la norma legal interna citada. Indica que el espíritu de la Ley N° 19.123 al establecer beneficios relacionados con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación no pueden confundirse con aquellas que emanan del Derecho Internacional que imponen la obligación de reparación íntegra. Refiere que la citada ley no establece la incompatibilidad reclamada por el Fisco, como tampoco importa una renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia. Por último agrega que los beneficios establecidos en el cuerpo legal no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral sufrido por las víctimas (Sentencia Corte Suprema, Rol N° 1424-2013, “Episodio Tejas Verdes”, considerando décimo tercero).

DÉCIMO SEXTO: Que, a fin de zanjar la discusión anterior, el hecho que los demandantes sean beneficiarios de un sistema de previsión de salud especial, según se desprende de los certificados PRAIS, acompañados por los propios



Foja: 1

demandantes; de gestos simbólicos u otras medidas análogas, que por lo demás no han sido acreditadas en estos autos, no es en caso alguno incompatible con la obtención de indemnizaciones pecuniarias por los graves hechos cometidos de los cuales han sido víctimas directa o indirectamente.

Es por lo anteriormente expuesto que se rechazara la excepción alegada de reparación satisfactiva, ya obtenida por los demandantes.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, respecto a las alegaciones efectuadas por la parte demandada en cuanto a que la acción civil se encontraría prescrita, ya sea porque los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 1974, o por la fecha de retorno a la democracia, por lo que han transcurrido con creces los plazos para ejercer la acción civil; se deben tener presente una serie de elementos facticos y jurídicos.

En primer lugar, y como ya se ha señalado reiteradamente en esta sentencia, nos encontramos frente a crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establecen los respectivos convenios e instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, toda vez que estos hechos ocurrieron en un contexto de excepción, período en que se violaron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o con simples fines de amedrentamiento de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

Considerando la conclusión del párrafo precedente, corresponde determinar si estos son prescriptibles o no, teniendo presente que partiremos enfocándonos en la acción penal. Así, uno de los elementos más característicos de los crímenes de lesa humanidad es justamente su imprescriptibilidad, pues así se establece, por ejemplo, en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de fecha 26 de noviembre de 1968, específicamente en su artículo I letra b), el que señala que *“Los crímenes siguientes son imprescriptibles, (...) b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz...”* y en el artículo 3° del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda de 1994. Si bien la Convención no se encuentra ratificada por nuestro país, las normas y especialmente los principios contenidos en el instrumento internacional, sin lugar a dudas se elevan a la categoría de ius cogens, la que sí tiene plena aplicación en nuestro derecho interno. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema en fallos recientes, como son en causa Rol N° 1424-2013, denominado “Episodio Tejas Verdes” de fecha uno de abril de 2014, en sus considerandos sexto al décimo quinto; la causa Rol N° 4300-2014,



Foja: 1

denominado “Episodio Nilda Peña Solari” de fecha cuatro de septiembre de 2014, en sus considerandos octavo al décimo tercero; y la causa Rol N° 21.177-2014, denominado “Episodio Villa Grimaldi”, caratulados “Ramón Martínez González”, de fecha diez de noviembre de 2014, en sus considerandos décimo cuarto al décimo octavo, solo por citar algunos.

En consecuencia, habiéndose determinado que la acción penal en materia de crímenes de lesa humanidad resulta imprescriptible, es necesario establecer si en el caso de marras la acción civil que deriva de estos hechos punibles también resulta imprescriptibles o si por el contrario debe aplicarse las reglas generales de prescripción del Código Civil.

Es así, que teniendo claro que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, resultaría incoherente entender que la presente acción indemnizatoria, si esté sujeta a normas de prescripción, siendo contrario ello a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito. Así lo ha resuelto la Corte Suprema, en reiterados fallos, como por ejemplo en la sentencia de reemplazo en causa Rol. N° 4300-2014, de fecha cuatro de septiembre de 2014, denominado “Episodio Nilda Peña Solari” (considerando Segundo), de igual forma en causa Rol. N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, denominado como “Episodio Tejas Verdes” (considerando Undécimo, segundo párrafo), en la cual se establece claramente que la acción civil es imprescriptible. A mayor abundamiento señala el citado fallo:

“... Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama...”

Misma conclusión ha llegado la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo en sentencia causa Rol. N° 1476-2014, de fecha cuatro de noviembre de 2014 (considerando Décimo Cuarto), la que señala en lo relativo a la acción civil que al igual que la acción penal, ésta



Foja: 1

“... es imprescriptible porque se sustenta en una conducta ilícita de agentes del Estado... calificándose el delito de lesa humanidad”.

Debe tenerse presente además, que no estamos frente a una acción de indemnización de perjuicios común, que derive de relaciones privadas contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el ius cogens, propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, por cuanto ha ratificado la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.

Cabe señalar también, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Chile y vigente, dispone en su artículo 63.1 que *“cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”*, lo que se traduce en una obligación constitucional para el Estado chileno, de indemnizar por la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incorporada a nuestro derecho interno por mandato del artículo 5° de la carta política, sin que sea posible estimar, como pretende la demandada, que dicha instrucción indemnizatoria está dirigida exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no a nuestros tribunales de justicia, aserto que importaría desdeñar preceptos constitucionales.

Es así, que los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, si bien también se aplican a favor del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, no resultan aplicables en esta materia, por ser abiertamente contrarias a las normas internacionales de Derechos Humanos ya mencionadas, que establecen



Foja: 1

un carácter unitario de las acciones penales y civiles emanados de delitos de lesa humanidad.

Así las cosas, esta sentenciadora y teniendo presente las normas ya referidas y por los fundamentos antes expuestos, rechazará tanto la alegación principal como la subsidiaria en cuanto a declarar cualquiera de las prescripciones de la acción civil que da origen a estos autos, declarando expresamente para los efectos de la presente sentencia, que la acción civil emanada de un acción penal de tipo imprescriptible por crímenes de lesa humanidad, también es imprescriptible.

DÉCIMO OCTAVO: Que, entrando al fondo de la acción deducida, y teniendo responsabilidad civil el Estado, según se explicó en los considerandos precedentes de esta sentencia, habiéndose además declarado la compatibilidad entre la indemnización de perjuicios por daño moral y las prestaciones que otorga la Ley N° 19.123 y N° 19.980 y las reparaciones simbólicas, en el caso que el demandante fuera beneficiario de ellas, y declarada la imprescriptibilidad de la acción de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad, corresponde analizar la procedencia de indemnizar a los demandantes, por el daño moral con ocasión del asesinato de don Juan Domingo Arias Quezada, cometido por agentes del Estado, y en la afirmativa, fijar la cuantía de la indemnización, refiriéndose de paso a las excepciones relativas al monto y naturaleza de la indemnización e improcedencia del pago de reajustes en la forma solicitada por el actor, opuesta por la demandada.

Debe tenerse presente que el daño moral, es definido como el detrimento, angustia, dolor sufrimiento, aflicción o menoscabo o trastorno psicológico, afección espiritual o lesión de un interés personalísimo, causado a la espiritualidad de la víctima como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito o de la infracción a un derecho subjetivo, no definible por parámetros objetivos, que puede afectar a la víctima o a un tercero, pudiendo consistir en daño moral puro o bien de índole pecuniario cuando indirectamente afecta la capacidad productiva del perjudicado.

Así también, en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema ha definido el daño moral como la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra.

DÉCIMO NOVENO: Que, habiéndose acompañado los certificados de nacimiento de los demandantes, y el certificado de defunción y nacimiento de la víctima, y



Foja: 1

constando en autos, que los demandantes son hermanos de don Juan Domingo Arias Quezada; se tendrá por acreditada la relación de parentesco entre este y las víctimas directas, por cuanto no solo no fue un hecho discutido en la presente causa, sino que fue también acreditado mediante el certificado emitido por Subsecretaría de Derechos Humanos, acompañado al anexo de folio 1.

VIGÉSIMO: Que, las relaciones descritas, ya bastan para tener por acreditado el daño moral sufrido por el demandante, en atención a la cercanía inmediata e intimidad que naturalmente une a los hermanos; situación que no ha sido desacreditada por la contraria, presumiéndose con claridad que su pérdida causó un gravísimo desconsuelo, pesar y dolor, más aun considerando las terribles circunstancias del hecho que motivan la presente causa como es el asesinato del hermano de los demandados, quien solo tenía 17 años al momento del suceso; lo que trastornó gravemente su entorno familiar, todo debido a un actuar horrendo llevado a cabo por agentes del Estado.

Que, para acreditar el daño moral alegado, los demandantes acompañaron al anexo de folio 33, informes psicológicos emanados del PRAIS, respecto a los hermanos Catalina, Ángela, Mercedes, Patricia, José, Ángel y Leonardo; los que dan cuenta de trastornos psicológicos en cada uno de ellos.

En el caso de doña Elba, presentó informe psicológico de otra institución, no obstante, atendido el contenido de este, unido a la declaración de testigos de folio 51, permiten presumir la existencia del daño, en conformidad a lo dispuesto por los artículos 1712 del Código Civil y 426 del Código de Procedimiento Civil.

Cabe destacar, que los testigos dan cuenta de problemas de naturaleza familiar, producto del asesinato de don Juan Domingo Arias Quezada, constituyendo plena prueba, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil.

Se debe tener presente también, que respecto de la materia que nos convoca, este daño moral es el único que se encuentra establecido por ley. Así, la Ley N° 19.123 modificada posteriormente por la Ley N° 19.980 en su artículo 2° en relación con el artículo 18 reconoce clara e innegablemente la existencia de daño moral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a quienes se consideran causantes de los beneficios ahí establecidos, haciéndose extensivo a los familiares. Este mismo criterio es el que ha establecido la Corte Suprema al indicar que los citados cuerpos legales de manera explícita reconocen la existencia de los daños y conceden a los familiares de las víctimas calificadas por



Foja: 1

violación a los derechos humanos beneficios de carácter económico o pecuniario (Sentencia Corte Suprema Rol N° 1424-2013, de fecha uno de abril de 2014, considerando Décimo).

En consecuencia, por todo lo expresado, se encuentra ampliamente acreditado en autos la existencia del daño moral ocasionado a los demandantes, debido al secuestro calificado y desaparición cometido por agentes del Estado en contra del hermano de los demandantes, don Juan Domingo Arias Quezada, ilícito ya reproducido en considerados previos de esta sentencia.

Que, en cuanto a los oficios presentados al folio 35, 37 y 39, todos referidos a las consecuencias de salud física y mental sobre las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Dictadura Militar, las que concuerdan en que eventos de detención, prisión política y tortura provoca un profundo sufrimiento psíquico, caracterizado por una intensa angustia, sensación de pérdida permanente en el tiempo, frustración, dolor en extremo aniquilante, desgarrador y autodestructivo, síntomas depresivos, desinterés en el mundo externo, familiar y laboral, pérdida de motivación, sentimientos de desamparo, vulnerabilidad y miedo de carácter persistente, ver a la estructuras estatales como organismos amenazantes, manifestaciones somáticas como dolores corporales crónicos, insomnio, lumbago, cefaleas, entre otros. Si bien estos informes son de carácter genérico, vienen a reforzar el daño moral legalmente existente que las víctimas directas de violaciones a los Derechos Humanos han padecido.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, la demandada ha alegado que la suma sobre la que se pretende obtener una indemnización, resultan excesivas, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en estas materias y los montos promedios fijadas por los tribunales de justicia. Además, subsidiariamente alegó que la regulación del daño moral, debe considerar todos los beneficios consistentes en la reparación integral y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Al respecto cabe señalar que la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala. Dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios a través de los cuales el Estado chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas. El propio artículo



Foja: 1

4° de la citada ley dispone que *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

En consecuencia, los beneficios establecidos en la Ley N° 19.123 y 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, correspondiendo a pagos de distinta naturaleza que cumplen con un objetivo diverso y que además emanan de una fuente distinta.

Además, es pertinente señalar que la demandada no acreditó si el actor es beneficiario de alguno de estos beneficios, ni el monto de estos si es que fuera efectivo.

Así, habiendo establecido que no existe una incompatibilidad entre los beneficios otorgados voluntariamente por el Estado y las acciones judiciales que puedan hacer valer en Tribunales, la alegación de la demandada de tener en consideración pagos efectuados a terceros no encuentra asidero jurídico alguno en nuestra legislación, consistiendo esa defensa simplemente en una extensión de la excepción de preterición ya rechazada, por lo que se rechazará la alegación de tener en consideración los pagos efectuados a otros familiares para tener en consideración al momento de regular el monto a pagar del daño moral.

Por último y en lo referente a tener en consideración los montos establecidos por otros tribunales, cabe recordar que rige para todos los tribunales del país el principio de independencia, que el hecho de citar jurisprudencia en un fallo tiene por objeto simplemente reforzar los fundamentos que se plantean en cada sentencia individualmente, no operando en nuestro país la doctrina del stare decisis (ya sea horizontal o vertical). Tanto es así, que lo más cercano a ello puede encontrarse únicamente el procedimiento laboral, en el que el legislador creó de forma extraordinaria el recurso de unificación de jurisprudencia, dando



Foja: 1

cuenta que ello constituye una excepción a la generalidad de nuestros procedimientos.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, determinada la existencia del daño moral sufrido por el actor, es necesario fijar su cuantía en dinero. Cabe señalar que la apreciación pecuniaria del daño moral, por la naturaleza del mismo, es compleja. El principio de reparación integral tiene limitaciones, no debiendo en aras a ser fiel a sus lineamientos, otorgar una indemnización excesiva o desmedida tornándose caprichosa o arbitraria y no cumpla con la exigencia de reparar en forma equitativa el daño sufrido.

Para esta materia, esta sentenciadora considerará prudencialmente el mérito de los antecedentes aportados al proceso, en especial la magnitud del daño y las horribles circunstancias de ilícito, esto es el asesinato de un menor de 17 años por órganos del estado, implicando ello que sus familiares, incluidos los demandantes de autos, hayan padecido dolor y secuelas psicológicas; ello con el objeto de fijar un monto que se corresponda a la entidad y naturaleza del daño ocasionado a las víctimas de autos.

Que, asimismo, este tribunal comprende plenamente que las sumas de dinero que se concedan a las víctimas en nada destierran el dolor y aflicción permanentes sufridos por el demandante, debido a las conductas ilícitas ya narradas, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, agentes del Estado quienes por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de ellos, encontrándose entre ellos don Juan Domingo Arias Quezada.

Que, habiendo el Estado truncando la vida familiar, durante tan largo tiempo, situación que se mantiene hasta esta fecha; corresponde ahora que los devuelva en alguna medida a su amparo, por lo que la acción deducida habrá de prosperar.

En consecuencia y según lo expuesto, encontrándose acreditada la comisión del delito, la participación penal de los agentes del Estado que intervinieron y la relación de parentesco de la víctima y los demandantes, el Estado debe reparar el perjuicio ocasionado, cuya determinación concierne prudencialmente a este tribunal, toda vez que resulta imposible medir con exactitud la intensidad del sufrimiento que provoca la desaparición y la irresolución del destino de un familiar en tan vitandas circunstancias.



Foja: 1

Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior y ante la urgencia de la demandada de revisar la jurisprudencia anterior, a efectos de fijar el monto de la indemnización se tendrán presente tres fallos dictados en esta materia, los que han de servir como inspiración.

Así en sentencia en causa Rol 2182-98, caratulada “Operación Colombo, Episodio “Carmen Bueno y otro”, de fecha 27 de noviembre de 2015, dictada por el ministro en visita señor Hernán Crisosto Greise, se fijó como indemnización de perjuicios la suma de \$50.000.000.- en favor de la actora, hermana de la víctima;

En causa Rol 26.649-2005, caratulada “Episodio Operación Colombo”, sentencia de fecha 16 de noviembre de 2015, dictada por el ministro en visita señor Jorge Zepeda Arancibia, se fijó para uno de los actores, el hermano de la víctima, la suma de \$40.000.000.

En causa Rol 2182-98, caratulada “Operación Colombo, Episodio “Antonio Cabezas Quijada”, sentencia de fecha 08 de enero de 2016, dictada por el ministro en visita señor Hernán Crisosto Greise, se fijó como indemnización de perjuicios la suma de \$ 40.000.000 a cada uno de tres actores de la causa, todos ellos hermanos de la víctima.

En atención a lo expuesto se fijará la indemnización de perjuicios por daño moral que deberá pagar el Estado en favor de los demandantes en la suma de \$50.000.000, para cada uno, asciendo al total de \$400.000.000.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, la suma se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha en que quede firme y ejecutoriada la sentencia y hasta el pago efectivo de la indemnización, por lo que a este respecto, se acogerá la excepción deducida por la demandada. Respecto a los intereses legales, estos se devengarán desde la fecha en que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia y hasta la fecha de su pago efectivo, rechazándose la excepción opuesta respecto a su improcedencia.

VIGÉSIMO CUARTO Que, en cuanto al resto de documentos acompañados, individualizados mas no analizados en particular, en nada alteran lo resuelto por lo que se omitirá pronunciamiento al respecto.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, no habiendo resultado totalmente vencida, no se condenará a la demandada al pago de las costas.



Foja: 1

Y, VISTO ADEMÁS lo dispuesto en los artículos 5° y siguientes y 38° de la Constitución Política de la República; artículos 2332, 2515 y 2497 del Código Civil Chileno; artículo 4° de la Ley N° 19.653 de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 19.123 y Ley N° 19.980; artículo 3 común de los Convenios de Ginebra; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 27° y siguientes de la Convención de Viena; artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 139, 144, 160, 170, 342, 346, 358, 384, 426 y 428 del Código de Procedimiento Civil, SE RESUELVE:

I.- Que, se rechaza la tacha opuesta contra el testigo don Luis Antonio Núñez Calvin.

II. Que se RECHAZA la excepción de preterición legal de los demandantes.

III.- Que se RECHAZA la excepción de reparación satisfactiva al actor.

IV.- Que se RECHAZA la excepción principal de prescripción de la acción civil de 4 años en virtud de lo dispuesto por el artículo 2332 del Código Civil.

V.- Que se RECHAZA la excepción subsidiaria de prescripción de la acción civil de 5 años en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil.

VI.- Que se RECHAZA la alegación subsidiaria de regulación que el daño moral debe considerar los beneficios consistentes en la reparación y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

VII.- Que SE ACOGE la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral interpuesta a fojas 1, en contra del demandado Fisco de Chile, y SE CONDENA a éste a pagar en favor de los demandantes la suma de \$50.000.000.- (cincuenta millones pesos), para cada uno de los hermanos de la víctima individualizados en la demanda, esto es Catalina, Ángela, Mercedes, Patricia, Elba, José, Ángel y Leonardo, todos Arias Quezada; ascendiendo a la suma total de \$400.000.000.

VIII. Que la suma indicada, se pagará reajustada de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha en que quede firme esta sentencia y el pago efectivo de la indemnización y devengará intereses legales desde la misma fecha y hasta su pago efectivo.

IX.- Que se ACOGE la alegación de improcedencia de pago de reajustes en la forma solicitada.



C-17435-2020

Foja: 1

X.- Que NO SE CONDENA en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

C-17435-2020.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.-

DICTADA POR DOÑA GABRIELA SILVA HERRERA, JUEZ TITULAR.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticuatro de Enero de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEHNXDZKCBK